

# 7 Partidos Políticos y Democracia en la Argentina

*James W. McGuire*

La transferencia en julio de 1989 de la presidencia de la Argentina de Raúl Alfonsín a Carlos Menem marcó la primera vez en la historia del país que un presidente de un partido elegido por voto popular ocupara el puesto dejado por un presidente de otro partido también de elección popular. La rotación de la presidencia del radicalismo al peronismo fue un momento decisivo en la evolución de un sistema de partidos. Antes de la democratización en 1983, fueron oficiales de las Fuerzas Armadas o políticos elegidos deslealmente los que habían gobernado a la Argentina durante la mayor parte del siglo veinte. Gobiernos civiles elegidos lealmente se desempeñaron en el cargo entre 1916 y 1930, entre 1946 y 1955 y entre 1973 y 1976; sin embargo, un sistema de partidos real no funcionó durante dichos períodos. Como ha argumentado Sartori, un sistema de partidos presupone que cada partido se visualiza como “parte” de una “organización política concebida como un todo pluralista”<sup>1</sup>. Tal no fue el caso en la Argentina, donde cada una de las principales fuerzas políticas —el radicalismo (que gobernó entre 1916 y 1930) y el peronismo (que gobernó entre 1946 y 1955 y entre 1973 y 1976)— a menudo se retrata a sí misma como un “movimiento” potencialmente hegemónico, especialmente cuando ocupaban el poder. Los partidos como “partes” se diferencian de los movimientos con pretensiones hegemónicas en tres maneras importantes. En primer lugar, los partidos tienden a percibir la oposición como algo permanente y legítimo, mientras que los movimientos buscan formar una unidad nacional donde la oposición se desvanece al punto de desaparecer. En segundo lugar, los partidos tienden a percibir las elecciones como el único camino apropiado para alcanzar el poder, mientras que los movimientos tienden a tratar de alcanzar o retener el poder usando los medios más convenientes a mano. En tercer lugar, los partidos tienden a representar a sus líderes como menos importantes que sus filosofías y políticas, mientras que los movimientos tienden a exaltar a sus líderes y a darles mayor flexibilidad en cuanto a programas y procedimientos.

Tanto el peronismo como el radicalismo han evidenciado tendencias movimentistas. El radicalismo evidenció una vocación hegemónica a fines de los años veinte, especialmente con las intervenciones del Presidente Hipólito Yrigoyen en las provincias; adoptó un enfoque de “todo vale” para alcanzar el poder a fines de la década del cincuenta y principios de la del sesenta cuando colaboró en la proscripción del peronismo; y evidenció plebiscitismo bajo Yrigoyen (1896-1930) e inicialmente bajo Alfonsín (1983-1985). El peronismo evidenció una vocación hegemónica a comienzos de la década del cincuenta cuando Perón redujo los espacios para la oposición política, adoptó un enfoque de “todo vale” para alcanzar el poder durante el mismo período al manipular fraudulentamente las elecciones de 1951, y evidenció plebiscitismo bajo Perón (1943-1974) y Carlos Menem (1988). Desde la perspectiva de construir instituciones democráticas, la vocación hegemónica y el enfoque de “todo vale” para alcanzar el poder fomentan actitudes y prácticas que hacen que la democracia sea difícil de sostener. El plebiscitismo impide la consolidación democrática en forma indirecta, debilitando los vínculos entre las clases sociales y los partidos políticos.

Además del movimentismo, una segunda clave de la política argentina es el papel marginal que han jugado los partidos en la organización y canalización de los intereses de los grandes hacendados y de los obreros urbanos, dos de los actores clasistas más cohesionados del país. Los grandes hacendados de la Pampa, que proporcionan la mayor parte de la comida y de las divisas de la Argentina, nunca han establecido vínculos con un partido (o partidos)

capaz de ganar elecciones leales. A menudo se argumenta que, dada la centralidad socioeconómica de la elite de la Pampa, la falta de un partido conservador con reales posibilidades electorales significa la posibilidad de un colapso de la democracia del país<sup>2</sup>. Otro tipo de laguna existe entre los obreros y los partidos. Desde mediados de la década del cuarenta, la mayoría de los obreros se han identificado y han votado como peronistas; sin embargo, pocos líderes plebiscitarios o líderes sindicales del peronismo han llegado a valorar las organizaciones partidarias como una parte indispensable del movimiento peronista. Debido a que el mismo Perón miraba con escepticismo a los partidos y los políticos, y debido a que los sindicatos siempre han sido, como lo dijo muchas veces Perón, “la piedra angular del movimiento”, la institucionalización del peronismo como partido siempre ha sido débil en el sentido específico formulado por Philip Selznick:

“Institucionalizar” significa *infundir de valor* más allá de los requisitos técnicos de la tarea inmediata...la prueba de dicha infusión de valor es que sea prescindible. Si una organización es sólo un instrumento, se modificará o se desechará cuando se haga disponible una herramienta más eficiente. Por lo tanto, la mayoría de las organizaciones son prescindibles. Sin embargo, cuando se produce la infusión de valor se resiste el cambio. La gente siente una pérdida personal; pareciera haberse violado la “identidad” del grupo o comunidad...Las organizaciones se infunden de valor cuando llegan a simbolizar las aspiraciones de la comunidad, su sentido del destino<sup>3</sup>.

Desde sus inicios a mediados de la década del cuarenta, la identidad colectiva del peronismo ha sido fuerte, pero la institucionalización como partido ha sido débil. Durante mucho tiempo los peronistas han pensado que los líderes plebiscitarios y sindicales son los actores realmente importantes, no las organizaciones partidarias. Las restricciones sobre la participación electoral peronista entre 1955 y 1972 reforzaron la perspectiva de que lo que realmente importaba en el movimiento era Perón y los sindicatos; sin embargo, la institucionalización del partido era débil mucho antes de la proscripción y siguió siendo débil por mucho tiempo después. Las raíces de la débil institucionalización partidaria del peronismo radican no en la proscripción sino en el estilo de liderazgo plebiscitario de Perón. Al establecer vínculos personales directos y afectivos con sus seguidores y al mismo tiempo socavar y a menudo empañar la organización partidaria, Perón dejó un legado de sentimientos antipartidarios que obstaculizaron la institucionalización partidaria y ayudaron a perpetuar la laguna entre los obreros y la actividad partidaria.

Los orígenes del aislamiento de los hacendados de la política partidaria no se encuentran en el plebiscitismo sino simplemente en una carencia de influencia política. La poderosa clase de hacendados pampeanos numéricamente es pequeña, y la ausencia de un campesinado amplio y sedentario, que en otros países (Chile, por ejemplo) se ha persuadido mediante lisonjas o coacción a entregar su voto a favor de partidos dominados por los hacendados, ha reducido aún más su viabilidad electoral. Comenzando en 1912 cuando se eliminó el fraude electoral flagrante, y más acabadamente a fines de la década del veinte cuando los hacendados perdieron su influencia en el radicalismo, la elite de la Pampa en general ha permanecido indiferente y/u hostil frente a la política de partidos, no solamente debido a su carencia de influencia electoral, sino también porque ha sido capaz de utilizar organizaciones clasistas poderosas como medios alternativos de influencia política. En este sentido los hacendados se parecen a los obreros. Los hacendados han utilizado varias organizaciones, entre las que destaca especialmente la Sociedad Rural Argentina (SRA), para cabildear al gobierno, influenciar la opinión pública y sustraer del mercado a su ganado y productos. Los obreros también han usado los sindicatos y la Confederación General de Trabajo (CGT) para movilizar huelgas y manifestaciones, organizar tomas de fábricas y apoyar o denunciar al gobierno en los medios de comunicación<sup>4</sup>.

A menudo las organizaciones clasistas han retenido su influencia bajo regímenes autoritarios. Por ejemplo, la CGT y la SRA formaron y construyeron las políticas económicas durante el gobierno militar de 1966-1973<sup>5</sup>. Igualmente, existen varias estrategias para habilitar a un líder plebiscitario —elecciones escenificadas, manifestaciones populares o un golpe liderado por líderes militares solidarios— que también son compatibles con un gobierno autoritario. Manifestaciones masivas durante la dictadura militar de 1943-1946 abrieron el camino para que Perón alcanzara el poder. En contraste, la actividad partidaria sólo puede ser eficaz bajo un régimen democrático. Cuando no existen elecciones leales ni un poder legislativo moderadamente poderoso, los partidos se convierten en partidos de papel. Por lo tanto, las personas que infunden un partido de valor adquieren un interés más directo y personal en la sobrevivencia de las instituciones electorales y legislativas que las personas que subordinan la actividad partidaria a presiones de organizaciones clasistas o a un enfoque de “todo vale” para obtener el cargo para su líder. A la vez, es más probable que aquellos que hayan adquirido este tipo de interés defiendan dichas instituciones cuando sean amenazadas.

No existe ninguna garantía de que las personas que valorizan los partidos se movilizarán para defender las instituciones democráticas, ni de que las probabilidades de una movilización de este tipo impedirá que los oficiales de las Fuerzas Armadas ejecuten un golpe. Sin embargo, la literatura sobre las intervenciones militares —la causa más importante e inmediata del colapso de la democracia en la Argentina— sugiere que la postura de los sectores civiles frente a la posibilidad de un golpe influye mucho en la probabilidad de que se produzca el golpe. Robert Potash ha argumentado que seis golpes militares entre 1930 y 1976 fueron “más una indicación de que los sectores civiles no fueron capaces de unirse en la defensa del gobierno institucional que el anhelo de poder de las Fuerzas Armadas”. Según Alain Rouquié, es “en la sociedad entera, en sus divisiones, conflictos y contradicciones, donde se deben buscar los orígenes del poder militar”. Tal como declara Samuel Huntington, por lo general “la susceptibilidad de un sistema político a una intervención militar varía inversamente a la fuerza de sus partidos políticos... Los golpes militares no destruyen a los partidos, ratifican la deterioración que ya se ha producido”<sup>6</sup>. Según cada uno de estos autores, las causas principales de un golpe no se encuentran dentro de las Fuerzas Armadas sino en la falta de solidez de los partidos políticos del país y en la poca voluntad de los ciudadanos de defender las instituciones democráticas.

Durante mucho tiempo el movimentismo y los vínculos clase-partido débiles se han mantenido al centro mismo de los análisis de la política argentina. El propósito de este capítulo es resumir la erudición sobre el tema y edificar sobre ese fundamento de cuatro maneras: en primer lugar, mostrar que el movimentismo y los vínculos clase-partido débiles remontan a principios del siglo veinte; en segundo lugar, señalar algunos momentos críticos donde los hacendados u obreros pudieron haber establecido vínculos más fuertes con los partidos; en tercer lugar, desglosar el concepto de movimentismo y mostrar que muchos de sus elementos sobrevivieron en forma atenuada durante los años ochenta y noventa; y en cuarto lugar, relacionar, en forma más explícita que otros análisis, el movimentismo y los vínculos clase-partido débiles con el desafío de construir instituciones democráticas.

## **ACTORES CLASISTAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y MOVIMENTISMO, 1880-1983**

La evolución de la política de partidos argentina desde la consolidación de la unidad nacional en 1880 se ha visto marcada por tres hitos decisivos. El primero fue la reforma electoral de 1912, que señaló el comienzo de una amplia participación electoral y permitió que la Unión Cívica Radical (UCR), el primer partido político de masas de la Argentina, obtuviera la presidencia en 1916. El segundo fue la aparición del peronismo a mediados de la década del cuarenta, que introdujo a la clase obrera de lleno en el campo político y llevó a la polarización del país en dos bandas: los peronistas y los antiperonistas. El tercero fue la elección presidencial de 1983, que marcó la institucionalización de un sistema de partidos y un fortalecimiento del apoyo popular para las instituciones básicas de una democracia liberal.

## LOS PARTIDOS EN UNA ERA DE GOBIERNO CONSERVADOR, 1880-1912

El primer partido político principal de la Argentina fue el Partido Autonomista Nacional (PAN). Para fines del siglo diecinueve el PAN se había convertido en el vehículo electoral dominante de los hacendados de la Pampa, quienes dominaron la economía floreciente de exportaciones de cereales y carne de res. Usando los términos de Duverger, el PAN era un partido de directores más bien que un partido de masas. Como lo explica Natalio Botana, no era "una organización diseñada para la movilización de la población, sino un instrumento que usaban las oligarquías regionales para comunicarse entre ellos"<sup>8</sup>. Entre 1880 y 1909 el PAN adulteró los censos electorales, compró votos y usó la intimidación (aprovechándose de que no existía la votación secreta) para socavar a los candidatos que postulaban bajo etiquetas partidarias opositoras efímeras. El sufragio universal para hombres había existido desde 1857, pero la concurrencia a votar variaba entre el 10% y el 25% de los votantes calificados<sup>9</sup>. El PAN sobrevivió hasta 1909 cuando se dividió, formando una multitud de partidos provinciales conservadores que dependían de los hacendados locales y grupos de aliados comerciales y profesionales.

En vez de una competencia entre partidos, la Argentina desarrolló una serie de hegemonías de partidos gobernantes: el PAN después de 1880, el radicalismo después de 1916 y el peronismo después de 1946. Se pueden elucidar los orígenes de dicho patrón de desarrollo político comparando la vida política argentina de fines del siglo diecinueve con las de Chile y Uruguay, que sí desarrollaron sistemas eficaces de competencia partidaria y que en el siglo veinte pudieron mantener períodos de gobierno democrático que, según normas tanto europeas como latinoamericanas, resultaron ser bastante duraderos. Las razones por las cuales se implantó la competencia partidaria con menos fuerza en la Argentina que en Chile o Uruguay son complejas; sin embargo, vale la pena señalar que en la Argentina fue sólo a fines del siglo diecinueve que los partidos que perdían las elecciones (o, antes de 1880, las batallas) se evaporaban o eran absorbidos por los partidos gobernantes. En Uruguay y Chile los partidos perdedores reaccionaban frente a la derrota reteniendo sus identidades partidarias y organizaciones partidarias incipientes y renovando su esfuerzo competidor en una fecha posterior.

Para 1880, cuando el PAN asumió el poder, quienquiera que controlara el poder ejecutivo a nivel nacional controlaba también el poder político y militar a través de todo el país. Tal no era el caso en Uruguay, donde, no pudiendo ganar una victoria militar decisiva sobre su rival, el partido Colorado entregó el control de las jefaturas en algunas provincias al interior del país a cambio de la promesa del partido Blanco de no rebelarse. Este tipo de convenio no sólo permitió que los Blancos sobrevivieran a pesar de no controlar directamente el poder ejecutivo a nivel nacional, sino también fomentó las disposiciones para la participación en el gobierno del partido perdedor que ayudó a mantener la competencia partidaria en el siglo veinte. La amenaza de una rebelión armada en Chile a fines del siglo diecinueve era menor que en Uruguay; sin embargo, entre 1891 y 1925 Chile contaba con un gobierno semiparlamentario que contrastaba directamente con el sistema presidencial altamente centralizado de la Argentina. Al hacer más divisible el poder político, el poder parlamentario en Chile reforzó el sistema multipartidista incipiente, mientras que en la Argentina el predominio abrumador del poder ejecutivo nacional reforzó la larga tradición en ese país de una hegemonía de una sola fuerza política. La tradición hegemónica afectó la cultura política argentina. Ya que no existía ninguna oposición efectiva, el PAN comenzó a visualizarse como un movimiento que personificaba todo lo bueno de la Argentina más bien que simplemente una parte de una organización política donde las fuerzas opositoras también tenían derecho a un espacio legítimo (o al menos duradero). En contraste, en Chile y Uruguay la fuerza política gobernante no podía ni destruir ni absorber a sus rivales. En esos países, la tenacidad de los partidos perdedores facilitó el surgimiento de una cultura política donde el derecho a establecer una oposición política, precondition crucial para la institucionalización de un sistema de partidos, se valorizaba más.

La presencia de fraudes electorales durante el período de la hegemonía del PAN también contribuyó al escepticismo en cuanto a que la actividad partidaria pudiera conducir al control de los recursos del Estado. En consecuencia, cuando en 1889 surgió una alianza reformadora, que pronto se convertiría en la UCR, ésta optó por la rebelión armada más bien que por la competencia electoral. Inicialmente, la UCR fue conformada por elementos de la clase media y miembros disidentes de la élite pampeana, y fueron estos últimos los que controlaron el liderazgo del partido hasta fines de la década del veinte<sup>10</sup>. Cuando Yrigoyen asumió el control de la UCR en 1898, siguió con las políticas de “intransigencia” y “abstención”, según las cuales el radicalismo rechazaba explícitamente el camino electoral a favor de la insurrección armada. Dichas políticas en parte constituían reacciones frente a los abusos electorales del PAN, que hacían muy poco probable que los candidatos opositores tuvieran éxito, pero también reflejaban la perspectiva de los líderes de la UCR de que se trataba de un movimiento y no de un partido. Como insistía Yrigoyen: “La Unión Cívica Radical no es un partido propiamente tal en un sentido militante; es un conjunto de fuerzas que emergen de la opinión de la nación”<sup>11</sup>. Y como ha señalado José Luis Romero, la política de intransigencia y abstención de los radicales “respondía a la firme convicción de que la masa popular tenía aspiraciones que la oligarquía no podía satisfacer y exigencias que sólo podrían lograrse con el triunfo total. Así comenzó a cobrar cada vez más vigor la idea de que la Unión Cívica Radical era un movimiento político excepcional, encarnación verdadera de la mayoría del país y, en consonancia, su auténtica representación política”<sup>12</sup>. Esta percepción de sí mismos que sustentaban los radicales recordaba aquella del PAN, prefiguraba aquella de los peronistas y subrayó la debilidad en la política argentina del concepto de una oposición legítima.

En 1905, cuando ciertos miembros de la élite pampeana comenzaron a abogar por reformas políticas, la UCR emprendió una rebelión armada. Aunque no tuvieron éxito, la rebelión cambió el ímpetu hacia el conjunto de fuerzas políticas, económicas y sociales que produjeron las reformas electorales de 1912. También contribuyó la belicosidad de la clase obrera liderada por anarquistas que hizo que muchos argumentaran que una reforma electoral podría prevenir una revolución social<sup>13</sup>. Los sindicatos surgieron en las décadas de 1870 y 1880, mucho antes que los partidos políticos de masas, de esa manera estableciendo una tradición donde los sindicatos eclipsaban a los partidos como vehículos para promover los intereses de los obreros. En 1894 se fundó un Partido Socialista, pero debido al fraude electoral y al hecho de que casi dos tercios de la clase obrera no tenía derecho a votar por haber nacido fuera del país<sup>14</sup> (mayoritariamente en Italia y España), no existía mucha probabilidad de que los socialistas pudieran obtener suficientes votos como para llevar a cabo la legislación pro obrera por la cual abogaban. El anarquismo, cuyas tácticas de insurrección no requerían de ciudadanía ni elecciones leales, se convirtió en la fuerza dominante del movimiento obrero durante la primera década del siglo veinte. Los obreros, negada la posibilidad de promover sus intereses mediante los votos, se lanzaron a las calles en manifestaciones masivas y a menudo violentas que inquietaron profundamente a la élite.

En parte porque temían que continuar con el fraude electoral podría consolidar el apoyo de los obreros al anarquismo, y en parte porque estaban confiados (nunca habiendo perdido una elección de importancia) de que podrían ganar unas elecciones leales, los conservadores promulgaron las reformas electorales de 1912, que transformaron el fundamento del régimen político argentino del fraude, la intimidación, los pactos entre bambalinas y la apatía electoral a la inscripción honesta de votantes, el conteo leal de votos, la votación obligatoria y la votación secreta. Puesto que la numerosa población extranjera de la Argentina todavía no tenía derecho a votar, las reformas electorales no constituyeron una ruptura total con el pasado. No obstante, produjeron un repunte repentino en la participación electoral, que aumentó del 21% del universo calificado en 1910 al 69% en 1912<sup>15</sup>. La competencia partidaria también floreció cuando los radicales dejaron a un lado su política de abstención, fortalecieron su organización en las provincias al interior del país, y aumentaron la entrega de alimentos y otras formas tradicionales de prebendaje político<sup>16</sup>. Al acercarse las elecciones presidenciales de

1916, la UCR se estaba convirtiendo rápidamente en el primer partido argentino de masas y estaba bien encaminado para reemplazar al PAN como la fuerza política dominante del país.

### HEGEMONÍA RADICAL Y RESTAURACIÓN CONSERVADORA, 1912-1943

La victoria aplastante de Yrigoyen en la elección presidencial de 1916 marcó el fin del reinado conservador y el comienzo de la hegemonía radical, que duró hasta 1930. La estructura social rural de la Argentina ayuda a explicar la desaparición de los conservadores. Ya que la ganadería y el cultivo de granos, las dos actividades agrícolas principales del país, tienen un alto coeficiente de tierras más bien que de mano de obra, no existe en la Argentina un gran campesinado sedentario, la clase social que durante mucho tiempo en Chile y Brasil proporcionó votos "cautivos" a los partidos conservadores<sup>17</sup>. Sin ese tipo de votos, y desprovistos de la posibilidad de fraude electoral por las reformas de 1912, los partidos conservadores en la Argentina tenían pocas esperanzas de obtener la presidencia o un porcentaje determinante de los escaños legislativos. Frente a esta coyuntura, los hacendados de la Pampa, que seguían siendo la clase social dominante del país, se incentivaron fuertemente a ejercer su influencia política en áreas ajenas al campo partidario y electoral.

Además de terminar con la hegemonía de la elite de la Pampa, las reformas electorales de 1912 proporcionaron a los obreros urbanos su primera oportunidad de ingresar a la política partidaria. Después de 1910, la represión y la lentitud del progreso evidenciado por los obreros erosionaron el apoyo de los obreros al anarquismo. Aprovechándose del espacio político resultante, Yrigoyen cultivó el voto obrero apoyando a los sindicatos en sus disputas con los empleadores. Dicha cultivación de los obreros urbanos terminó abruptamente en 1919 cuando la violencia en torno a una huelga motivó a los civiles conservadores, ayudados por la policía y oficiales de la marina, a desatar un semana de terror en Buenos Aires. Cientos de personas murieron en la violencia dirigida principalmente en contra de los judíos, quienes fueron estigmatizados colectivamente como "agitadores rusos"<sup>18</sup>. La Semana Trágica demostró que los conservadores, preocupados por la Revolución Rusa y otros acontecimientos de belicosidad obrera después de la Primera Guerra Mundial, tomarían acción directa para impedir una alianza entre la UCR y los obreros. Así terminó el primer intento de las élites argentinas de incorporar a los obreros a la política partidaria<sup>19</sup>. Después de la Semana Trágica, los radicales dejaron de cultivar a los obreros y se dedicaron a consolidar el apoyo que recibían de la clase media, especialmente mediante la entrega de empleos en el sector público.

Debido a que la Constitución de la Argentina prohíbe que los presidentes desempeñen el cargo por dos mandatos sucesivos de seis años, Yrigoyen escogió a Marcelo T. de Alvear, un hacendado eminente, para que fuera el candidato radical en la elección presidencial de 1922. Alvear obtuvo el 48% de los votos; ningún otro partido individual superó el 9% que obtuvieron los socialistas. Alvear desempeñó el cargo entre 1922 y 1928, pero era más conservador que Yrigoyen y no tardaron en irrumpir las peleas entre los dos líderes. De hecho, durante la presidencia de Alvear la UCR casi reincorporó a la elite de la Pampa, parecido a lo que había intentado hacer para incorporar a la clase obrera durante la primera parte de la presidencia de Yrigoyen. En 1924 el partido se dividió oficialmente y la facción más conservadora de Alvear tomó el nombre de Unión Cívica Radical Anti-Personalista (UCR-AP), llevando consigo a muchos de los hacendados eminentes del liderazgo de la UCR<sup>20</sup>. Sin embargo, Yrigoyen retomó el control del partido en 1928 y, de allí en adelante, la UCR aceleró el paso en su evolución hacia una representación primariamente de la clase media. Desde 1928 en adelante, el partido político más duradero de la Argentina representaría a su clase social más fragmentada y heterogénea. No surgió ningún partido viable en términos electorales para representar a los hacendados, y el peronismo, débilmente institucionalizado como partido, finalmente reclamó la lealtad de los obreros. En otras palabras, la clase social más débil de la Argentina se convirtió en la más plenamente incorporada a la política de partidos, mientras que las clases sociales más fuertes siguieron siendo las menos incorporadas.

La desigualdad entre la potencia socioeconómica y la incorporación a la actividad partidaria han sido un obstáculo formidable que ha impedido la consolidación democrática durante todo el siglo veinte.

En 1928 y 1929 Yrigoyen utilizó la intervención presidencial —la designación de fideicomisarios para reemplazar a funcionarios provinciales elegidos— para obtener el control de cuatro provincias que su ala personalista de la UCR había perdido en las urnas. Debido a que los senadores nacionales de la Argentina son elegidos por las legislaturas provincianas, y debido a que los personalistas ya controlaban la Cámara de Diputados, dichas intervenciones amenazaban con cerrar los últimos espacios políticos a la oposición conservadora<sup>21</sup>. Junto con el deterioro físico y mental de Yrigoyen, los indicios de un decaimiento económico después de la caída de la bolsa en 1929, y la inyección por Yrigoyen de partidismo y favores políticos en el proceso de ascensos militares, la negativa de un espacio político para la oposición conservadora (expresión primordial de la vocación hegemónica del radicalismo durante esta era) fue un precipitante crucial del golpe de 1930<sup>22</sup>. Sin embargo, los principales factores estructurales que sustentaban a dichos precipitantes y que produjeron el desmoronamiento del régimen competitivo post 1912 eran la falta de un campesinado sedentario (lo que privó a los partidos conservadores de una base electoral en el campo) y el creciente predominio al interior del radicalismo de la clase media urbana por sobre los intereses de la elite rural.

Después de un periodo breve de gobierno militar, se realizó una elección presidencial en noviembre de 1931. Se le prohibió a la UCR yrigoyenista competir en las elecciones, supuestamente porque su candidato, Marcelo T. de Alvear (que se había cambiado de los antipersonalistas a los yrigoyenistas), se había desempeñado en el cargo de la presidencia dentro de los últimos seis años, estableciendo así un precedente para la proscripción del peronismo después de 1955. El general Agustín P. Justo, ganador de la elección, postuló como candidato de la coalición Concordancia compuesta por tres partidos: los Radicales Anti-Personalistas (el partido de Justo), el Partido Demócrata Nacional (formado en 1931 como una fusión de quince organizaciones provinciales conservadoras) y el Partido Socialista Independiente (formado en 1927 como una rama conservadora del Partido Socialista). La intimidación y el conteo fraudulento de los votos garantizó que Roberto Ortiz, otro antipersonalista que postulaba como candidato de la Concordancia, ganara la elección presidencial de 1931. En 1940, por razones de enfermedad, Ortiz tuvo que transferir el poder al Vicepresidente, Ramón Castillo, quien prometió continuar con el “fraude patriótico”. Sin embargo, ahora los militares se preocupaban cada vez más de que la impaciencia con gobiernos conservadores generaría apoyo para el comunismo,<sup>23</sup> y en junio de 1943, poco después de que Castillo nombrara como su sucesor a un propietario de un cañaveral poco querido por los militares, fue derribado por una facción militar nacionalista que incluía al futuro Presidente Juan Perón.

## PERONISMO Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 1943-1955

Una expansión importante en los recursos de poder del movimiento obrero fijó el escenario para la llegada de Perón a la presidencia. La CGT, principal confederación de trabajadores de la Argentina, fue fundada en 1930, y la migración rural-urbana aumentó el número de trabajadores industriales de 467.000 en 1935 a 844.000 en 1943<sup>24</sup>. A pesar de estos progresos orgánicos y numéricos, la mayor parte del movimiento obrero permaneció ajena a la política de partidos. Primitivos documentos de la CGT declaran explícitamente que la confederación no tenía ninguna asociación con los partidos y los políticos, y de las tres tendencias ideológicas importantes en el movimiento obrero durante la década del treinta (socialista, sindicalista y comunista), sólo los socialistas estaban a favor de la actividad parlamentaria y electoral, una estrategia con pocas probabilidades de éxito en el contexto de la proscripción y el fraude electoral<sup>25</sup>. En consecuencia, en 1943 la Argentina contaba con un movimiento sindical grande y bien organizado pero que se mantenía ajeno al campo electoral y partidario. Por otra parte, durante las décadas anteriores las élites conservadoras habían

constreñido las políticas gubernamentales de tal forma que las reformas laborales y sociales se habían retardado. Reconociendo la desigualdad entre la fuerza subyacente de los obreros y el atraso en las leyes laborales y sociales, y aprovechando la debilidad relativa de los vínculos sindicato-partido, Perón cultivó a los obreros y usó el apoyo que le brindaron para llegar a la presidencia.

Luego de convertirse en secretario del trabajo en septiembre de 1943, Perón se dedicó a la formulación de una nueva legislación social y laboral, mejoró la aplicación de las leyes existentes, apoyó a los trabajadores durante las huelgas y ayudó en la organización de los trabajadores rurales. Debido a que su reformismo resaltaba en comparación con las políticas iniciales antisindicalistas del gobierno militar, Perón pudo atribuirse el mérito de los beneficios laborales conseguidos. De hecho, la capacidad posterior que demostró de poder personalizar el movimiento peronista se puede rastrear en parte al hecho de que fue él, y no la institución (el gobierno, los militares), el responsable de dichos beneficios. Al mismo tiempo, el ascenso de Perón al poder en el contexto de un gobierno militar proporciona el ejemplo más claro en la historia moderna de la Argentina de la habilitación de un líder plebiscitario fuera del contexto electoral y partidario. Este camino para alcanzar el poder, junto con el hecho de que Perón se desempeñaba como coronel del ejército, contribuyeron a la creencia de que se podía obtener justicia social sin tener que recurrir a una organización partidaria, y que los sindicatos podían lograr beneficios materiales dentro de la coyuntura de un gobierno militar.

Edificando sobre su popularidad entre los obreros y su relación íntima con el general Edelmiro Farrell, quien fuera presidente en 1944, Perón amplió el alcance de su poder dentro del gobierno militar, y para mediados de 1945 se convirtió en ministro de guerra y vicepresidente, además de secretario del trabajo. Este ascenso meteórico provocó la hostilidad de los líderes militares que codiciaban los cargos y la preeminencia de Perón, que se oponían a su cultivación de los obreros, o que se molestaban por su relación pública con Eva Duarte, la personaje radial con quien se casaría sólo en 1946. En octubre de 1945 los rivales de Perón lo encarcelaron. Sin embargo, el 17 de octubre de 1945 los líderes sindicales organizaron una manifestación masiva en protesta por el encarcelamiento de Perón. Al ingresar cientos de miles de trabajadores al centro de Buenos Aires, Perón fue liberado. Luego de dirigirse a la multitud desde el balcón de la Casa de Gobierno, Perón renunció a sus cargos en el gobierno y comenzó los preparativos para su candidatura presidencial.

En 1944, Perón había conversado con los líderes de la UCR acerca de la posibilidad de convertirse en el candidato de ese partido en la próxima elección<sup>26</sup>. No resultó nada de estas conversaciones, pero en los momentos posteriores a la manifestación de octubre 17 una facción que apoyaba a Perón se separó de la UCR, formó una nueva organización denominada la UCR-Junta Renovadora (UCR-JR) y proclamó su apoyo a Perón. Una coalición indeterminada de diferentes ramas del partido conservador, denominada los Centros Independientes, hizo algo parecido. Al final, la UCR-JR y los Centros Independientes sólo jugaron un papel secundario en la coalición de partidos que apoyó a Perón. Una semana después de la manifestación de octubre 17 un grupo de líderes sindicales fundó el Partido Laborista, un paso promisorio pero efímero hacia la participación obrera en la política de partidos. Aunque el Partido Laborista proporcionó la gran mayoría de los votos peronistas en la elección de febrero de 1946, Perón se cuidó de no dar demasiado poder a sus líderes y otorgó las candidaturas más apetecidas a los radicales y disidentes conservadores que se mostraban más dóciles. Después que ganaron, Perón utilizó el hecho de que dependían de su apoyo continuo para controlarlos. Durante los próximos treinta años Perón volvería a realizar esta acción equilibradora, socavando a sus rivales potenciales por medio de apoyar a las facciones más débiles entre sus partidarios contra los grupos potencialmente más autónomos.

La oposición a Perón en las elecciones de 1946 se denominó la Unión Demócrata, una alianza inverosímil de conservadores, radicales, socialistas y comunistas. Preocupados por la usurpación de su electorado por Perón y por su neutralidad implícitamente pro Eje durante la Segunda Guerra Mundial, los partidos de izquierda se aliaron con sus adversarios tradicionales

para oponerse a Perón. Haciendo juego del apoyo indiscreto otorgado al candidato de la Unión Democrática por el embajador de los Estados Unidos, Perón echó mano al nacionalismo para fomentar su candidatura presidencial y, en una elección que se juzga fue la más leal hasta la fecha en la historia de la Argentina, Perón obtuvo el 52% de los votos contra el 43% de sus oponentes. Tres meses después, alegando que conflictos internos ponían en peligro la unidad del movimiento, Perón disolvió los tres partidos que habían apoyado su candidatura presidencial y los reemplazó por un partido nuevo: el Partido Unico de la Revolución. En un principio los laboristas resistieron el llamado a la unidad, pero la mayoría ingresó al Partido Unico (renombrado el Partido Peronista en 1947), y los otros fueron encarcelados. La caída del Partido Laborista constituyó un punto decisivo en la historia institucional del peronismo<sup>27</sup>. Durante muchas décadas subsiguientes la institucionalización de las organizaciones partidarias que representaban al peronismo siguió siendo débil.

Formalmente el Partido Peronista era un partido de masas, con miles de *unidades básicas* y millones de miembros. En realidad, era un monolito vacío controlado rigurosamente por Perón. La constitución del partido elaborada en diciembre de 1947 facultaba al "jefe supremo" del movimiento para que "modificara las decisiones de los órganos [del partido]", fijara la agenda de las reuniones a todo nivel, supervisara la elección de los líderes del partido y supervisara la selección de los candidatos para los cargos de elección popular<sup>28</sup>. Otra característica que concentraba el poder en manos de Perón fue la división del partido en ramas sindicalistas y ramas políticas masculinas y (después de 1949) femeninas. Así como había usado la UCR-JR para contrabalancear al Partido Laborista más autónomo, Perón usó la rama política, cuyos líderes seleccionados dependían en gran medida de su apoyo personal, como contrapeso para la rama sindicalista, cuyos líderes a menudo contaban con sus propios recursos orgánicos, financieros y de prestigio.

Una rama femenina autónoma del Partido Peronista se creó en julio de 1949, dos años después que se otorgó a las mujeres el derecho a voto. Para 1952, la rama femenina contaba con medio millón de miembros y más de tres mil unidades básicas. Eva Perón, primera presidenta de la rama femenina, manejaba la organización como si fuera su propia máquina política; durante el mandato de Juan Perón la rama femenina no realizó ninguna convención partidaria<sup>29</sup>. En principio, la rama femenina, la rama masculina y la rama sindicalista del "movimiento (se dejó de usar el término *partido* en el título de la organización cuando se revisó la constitución del partido en enero de 1954) tenía el derecho a su tercio, es decir, el derecho a nominar un tercio de los candidatos peronistas para los escaños de diputados a nivel nacional y para otros cargos designados proporcionalmente". Según Delia Parodi, quien se convirtió en presidenta de la rama femenina después de la muerte de Eva Perón: "El tercio [de mujer] está fijado por Eva Perón, así, como una cosa intransferible, intocable y un derecho, el derecho que debe exigir siempre"<sup>30</sup>. El papel unilateral de Eva Perón en seleccionar los candidatos de la rama femenina indica que este sector del partido era aun más autoritario y personalista que la rama masculina, donde Juan Perón consultaba a los líderes de la rama para llenar los cargos del partido y las candidaturas para cargos de elección popular<sup>31</sup>.

Con la autoridad concentrada en manos del "jefe supremo" no es sorprendente que no surgió un grupo de líderes fuertes al interior del Partido Peronista. Además de esta debilidad en el liderazgo, el partido se caracterizaba, a pesar de la gran cantidad de miembros que tenía, por la escasa participación de las masas. El activista peronista no era necesariamente un miembro del partido, y los votos se movilizaban tanto a través del sindicato como a través del partido. Por otra parte, el aumento en las funciones de bienestar social del Estado, la fundación Eva Perón y los sindicatos significaban que desde una perspectiva de influencia política el partido era superfluo. El control personal de Perón sobre el aparato partidario impedía el desarrollo de una burocracia adaptable con gran espíritu solidario, y, al mismo tiempo, el papel jugado por las instituciones extrapartidarias en la distribución de beneficios de bienestar social hacían poco probable que el partido desarrollara una organización clientelista fuerte<sup>32</sup>.

La debilidad orgánica del Partido Peronista se vio influenciada por el control personal que ejercía Perón y además por la manera que escogió para ejercer su autoridad. A pesar de hablar siempre de "organizar las masas" y de la "comunidad organizada", Perón dejó a un lado el desarrollo orgánico prefiriendo los llamados directos a las masas y el adoctrinamiento ideológico. Perón se visualizaba como uno que mayormente "educa, enseña y moldea" y pensaba que la función principal del partido era "[in]culcar" en la gente este estilo de vida [peronista] y esta mística peronista<sup>33</sup>. El énfasis sobre los llamados directos a las masas y el adoctrinamiento ideológico a expensas de la organización diferenciaba a Perón de otros líderes populistas como Haya de la Torre de Perú y Betancourt de Venezuela, así como también de líderes revolucionarios como Mao y Lenin. Cada uno de estos líderes prestó más atención que Perón al desarrollo orgánico, y creó un partido capaz de resistir una represión tan dura, y quizás aún más dura, que la que experimentó el Partido Peronista después de 1955.

El descuido de Perón en cuanto al aspecto orgánico del desarrollo partidario se debía en parte a su escepticismo, definido por el ambiente internacional de los años treinta, acerca de la utilidad y el futuro de los partidos como instituciones políticas. Y también se originaba en el contexto en que funcionaba. Una gran parte de su base social principal, la clase obrera urbana, ya se había organizado en sindicatos antes que se formara el Partido Peronista, y Perón utilizaba a los sindicatos más que al partido para movilizar los votos. Más aún, como lo ha señalado Walter Little, el Partido Peronista se creó "para retener más bien que alcanzar el poder"<sup>34</sup>. Las experiencias de los leninistas, los maoistas, la APRA (Perú) y la Acción Democrática (Venezuela) todas sugieren que es más probable que emerja una fuerte identificación partidaria y una estructura orgánica eficaz, con una jerarquía explícitamente definida y un fuerte espíritu solidario, cuando un partido debe luchar para alcanzar el poder que cuando es creado por un jefe de Estado que quiere retener el poder que ya ostenta. En la misma Argentina, la UCR, nacida en condiciones de oposición y represión, desarrolló una organización más adaptable y, a pesar de sus propias tendencias movimentistas, una mayor percepción de sí misma como un partido que el Partido Peronista, el cual fue creado por un presidente que ocupaba el cargo.

El carácter personalista de la autoridad partidaria, las ideas de Perón sobre cómo ejercerla de la mejor manera, y el hecho de que el partido fue creado para retener el control del Estado más bien que para alcanzarlo, se vieron reflejados en tres facetas claves de la debilidad orgánica del Partido Peronista. En primer lugar, el mismo Perón más bien que el partido jugaba el papel principal en la movilización de los votantes y la distribución de favores políticos. En segundo lugar, los esfuerzos sistemáticos de Perón de socavar a sus rivales potenciales significó que el partido carecía de líderes de los niveles medio y superior capaces de manejar la organización por sí solos. En tercer lugar, los miembros partidarios y los que apoyaban al partido tendían a identificarse más con el mismo Perón que con la organización partidaria. En consecuencia, cuando Perón fue destituido en 1955, los líderes del partido se encontraban mal equipados para negociar con el gobierno antiperonista de Aramburu (1955 a 1958) para la sobrevivencia de la organización, como lo había hecho el APRA en Perú después del golpe de 1948. Tampoco pudieron establecer una organización clandestina eficaz y capaz de sobrevivir la represión antiperonista, como lo había hecho Acción Democrática en Venezuela después del golpe de 1948. La nula experiencia en sobrevivir en un ambiente político hostil o en intentar ganar o recuperar el poder político debilitó aun más la capacidad de resistencia de los funcionarios del partido frente a la reacción conservadora en contra de Perón. La debilidad orgánica del Partido Peronista original ayuda a explicar por qué el gobierno de Aramburu, que no logró erradicar la influencia peronista de los sindicatos, pudo, sin embargo, disolver el partido de Perón sin mayores dificultades.

A medida que avanzaba el tiempo de su presidencia Perón se volvió más autoritario. Tomó el control de la mayoría de los medios de comunicación, absorbió el poder legislativo en el ejecutivo y enmendó la Constitución para permitir su propia reelección inmediata. Puede ser que la elección de 1946 haya sido la más limpia en la historia de la Argentina, pero la que

se realizó en 1951 fue estropeada por la tergiversación, la negativa a los partidos políticos de la oposición de acceso a los medios de comunicación, la represión de reuniones políticas no peronistas y el encarcelamiento de los candidatos opositores<sup>35</sup>. Tal como había sucedido bajo Yrigoyen, la reducción de los espacios para la oposición política también produjo un aumento en la resistencia al régimen, que ya se había visto debilitado por la enfermedad y muerte de Eva Perón en 1952, por un plan de estabilización económica que incluyó la congelación de los salarios y la retirada del nacionalismo económico, y por el creciente descontento de sus deberes presidenciales por Perón. Catalizados por un conflicto entre Perón y la Iglesia Católica, estos factores subyacentes se combinaron en septiembre de 1955 para precipitar un golpe militar que destituyó a Perón de su cargo y le despachó a un exilio de dieciocho años.

## LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA PROSCRIPCIÓN DEL PERONISMO, 1955-1966

El gobierno militar que reemplazó a Perón fue encabezado por el general Eduardo Lonardi, cuyas medidas en contra del peronismo eran demasiado débiles para satisfacer a la mayoría de sus colegas. Después de ocupar el cargo por dos meses, Lonardi fue reemplazado por el general Pedro Aramburu, quien disolvió el Partido Peronista, prohibió futuras candidaturas de antiguos políticos peronistas y aprobó una ley que prohibía que aquellos que hubieran recibido sus órdenes directamente de Perón ocuparan la presidencia o gobernaciones importantes. El gobierno de Aramburu sí permitió la existencia de partidos neoperonistas como la Unión Popular y el Partido Laborista, quienes apoyaban la doctrina y las políticas de Perón en términos generales pero no recibían sus órdenes directamente de él. La tolerancia del gobierno en cuanto a los partidos neoperonistas se vio acrecentada por el hecho de que dichos partidos operaban primariamente en provincias poco pobladas al interior, tenían pocos vínculos (por ahora) con los poderosos líderes sindicales peronistas y se percibían como posibles causantes de una fragmentación del voto peronista.

Operando en base a una presunción errada de que la mayoría de los peronistas había apoyado a Perón por obligación o por engaño, Aramburu pensó que los radicales y los neoperonistas absorberían el voto peronista. Sin embargo, en 1956 la UCR se dividió. Una facción, que se convirtió en la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), fue liderada por Arturo Frondizi quien empezó a cultivar a los votantes de Perón tan pronto este último salió al exilio. Frondizi privilegiaba la preservación de las leyes sociales y laborales de Perón y denunció al gobierno de Aramburu como "antipopular". La otra facción, que se denominó la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), fue liderada por Ricardo Balbín quien quería derogar muchas leyes peronistas y apoyaba los esfuerzos de Aramburu para "desperonizar" a la sociedad argentina. La división en la UCR facilitó las cosas para que los peronistas obtuvieran una pluralidad en las elecciones legislativas de 1962 y 1965 (en las que se permitió que participara la Unión Popular, el partido neoperonista más grande), y de esta manera el peronismo se convirtió en una fuerza electoral mucho más formidable que lo que habría sido el radicalismo si hubiera permanecido unido. Por esta razón, la división en el Partido Radical contribuyó mucho a la eliminación de las elecciones leales de la lista de opciones disponibles para los que se oponían intensamente al regreso de Perón al gobierno.

Al hacer un trato secreto con Perón, quien aparentemente temía que los partidos neo-peronistas absorberían algunos de sus partidarios, Frondizi de la UCRI obtuvo una victoria aplastante sobre Balbín de la UCRP en las elecciones presidenciales de 1958, con los peronistas contribuyendo por lo menos con la mitad de los votos obtenidos por Frondizi<sup>36</sup>. Sin embargo, en diciembre de 1958 Frondizi promulgó un plan de austeridad económica y privatizó un frigorífico, y de esta manera impulsó al peronismo hacia una postura de oposición. Desde ese momento, las relaciones entre los líderes sindicales peronistas, quienes ejercían el control diario sobre el movimiento, y Perón, quien permanecía exiliado en Madrid, empezaron a empeorar. Los líderes sindicales ratificaron el llamado de Perón a votar en blanco en las elecciones legislativas de 1960, pero a muchos no les gustaba esta estrategia que en el futuro previsible prometía negarles el acceso a cargos de elección popular y restringir su

influencia sobre las políticas estatales. A comienzos de 1962, Augusto Vandor de los metalistas, el líder sindical peronista más poderoso e independiente, decidió que había llegado el momento de cambiar las tácticas.

Sin el permiso de Perón, Vandor fraudulentamente llevó votantes a la Unión Popular neoperonista y anunció que presentaría candidatos en las elecciones legislativas y de gobernadores de marzo de 1962. Inicialmente Perón estuvo de acuerdo, pero reconociendo que la victoria electoral de un partido neoperonista dominado por los sindicatos podría disminuir su propia posición y elevar la de Vandor, intentó hacer que se proscibiera la Unión Popular haciendo que él mismo fuera designado como su candidato para vicegobernador de Buenos Aires<sup>37</sup>. La táctica fracasó cuando los militares vetaron la candidatura de Perón pero dejaron intactos a los otros candidatos de la Unión Popular. La Unión Popular y los otros partidos neoperonistas obtuvieron el 32% de los votos legislativos, superando el 25% de la UCRI y el 20% de la UCRP, y un líder sindical peronista salió electo como gobernador de Buenos Aires, una provincia clave. Los vencedores nunca llegaron a ocupar sus cargos. El 28 de marzo de 1962 Frondizi fue expulsado por un golpe militar provocado por el éxito electoral de los peronistas.

El sucesor de Frondizi fue José María Guido, el Presidente del Senado, y bajo su mandato el poder real se iba alternando entre facciones militares antiperonistas de línea dura y línea blanda que escaramuzaban en las calles de Buenos Aires. Para fines de 1962, la facción de línea blanda llevaba la voz cantante y se programaron las elecciones para julio de 1963. La UCRI de Frondizi, la Unión Popular neoperonista y varios otros partidos menores formaron una coalición, pero privilegiando a la facción de línea dura, el gobierno proscibió sus candidatos. El confuso panorama político permitió que Arturo Illia de la UCRP obtuviera la presidencia con sólo el 26% de los votos. Entretanto, la decisión de Frondizi de unirse a la coalición que pronto sería proscrita dividió a la UCRI, obligando al antiguo presidente a la creación de un nuevo partido que al final se denominó el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), mientras que Oscar Alende, el gobernador de Buenos Aires que había rehusado unirse a la coalición, retuvo el control sobre lo que quedaba de la UCRI. En 1972, cuando una decisión judicial entregó a la UCRP los derechos exclusivos de usar la etiqueta UCR, la UCRI cambió su nombre denominándose el Partido Intransigente (PI), el cual sobrevivió, como también lo hicieron la UCR y el MID de Frondizi, hasta la década del noventa.

Aunque proscritos de las elecciones de julio de 1963, para cuando Illia ocupó el cargo en octubre de 1963 Vandor y los partidos neoperonistas se habían convertido en una fuerza política de importancia. A medida que se desvanecía la esperanza del retorno de Perón, se reconocía cada vez más a Vandor como el intermediario clave del movimiento peronista. Si hubiera tenido éxito en el desarrollo de un partido neoperonista basado en el movimiento obrero, los sindicatos se habrían visto envueltos más extensamente en la política de partidos que en cualquier momento desde la creación del Partido Laborista en 1945. Sin embargo, Vandor se enfrentaba a un dilema. Si pretendía que su partido ganara la aprobación de los antiperonistas militares y civiles, tendría que convencerles que Perón no tenía ninguna influencia real en la organización. Por otro lado, para que el partido ganara la aprobación de las bases peronistas, Vandor tendría que persuadir a Perón que no condenara una organización que le despojaría del control estratégico y táctico sobre el movimiento que tenía su nombre.

Ganar la aprobación de los antiperonistas resultó ser el problema menor. Para 1963, muchos antiperonistas estaban dispuestos a aceptar la iniciativa de Vandor en cuanto a desarrollar un partido, la que desde su punto de vista tenía tres ventajas. En primer lugar, era una forma de marginar a Perón. En segundo lugar, permitir que un partido neoperonista con sus bases en el movimiento obrero participara en las elecciones fomentaría la cohesión militar eliminado el tema divisorio de la proscripción, que había sido la causa principal de los enfrentamientos sangrientos entre antiperonistas militares de línea dura y de línea blanda en 1962 y 1963. En tercer lugar, permitir que siguiera la iniciativa en cuanto al desarrollo de un partido contribuiría a asegurar que Vandor, sólidamente anticomunista, seguiría dominando

entre los líderes sindicales. Inmediatamente después de la Revolución Cubana, la única cosa que temían los conservadores más que el retorno de Perón al gobierno era la posibilidad de que el peronismo, proscrito en forma permanente de la competencia electoral, pudiera "girar a la izquierda". Al fin y al cabo, el problema intratable para Vandor no era la oposición de los antiperonistas, sino la oposición desde el interior del peronismo: de Perón, de los líderes sindicales que no estaban de acuerdo con la iniciativa de desarrollar un partido, y también, como lo demostró la elección de 1966 en Mendoza, de los peronistas comunes y corrientes.

Elegido con apenas el 26% de los votos, Illia se encontró en problemas desde el principio. A mediados de 1964 Vandor organizó una serie de tomas de fábricas que insinuaban que Illia estaba perdiendo el control del país. El propósito inmediato de Vandor no era precipitar un golpe, como han argumentado algunos, sino más bien obligar al gobierno de Illia a dar a los líderes sindicales acceso permanente a la elaboración de políticas y demostrar a los militares que, en caso de intervenir, tendrían que hacer concesiones a los sindicatos para evitar confrontaciones similares<sup>38</sup>. Las tomas de fábricas también contribuyeron enormemente al prestigio de Vandor y ayudaron a convencer a Perón que debería intentar recuperar su posición al centro del escenario político, anunciando su intención de regresar a la Argentina. Sin embargo, fracasó en su intento de regresar cuando el gobierno de Illia persuadió a las autoridades brasileñas que impidieran la continuación de su viaje de Río de Janeiro a Buenos Aires. El fracaso de la Operación Retorno permitió que Vandor acelerara sus esfuerzos para desarrollar un partido, y en marzo de 1965 la Unión Popular, bajo la hegemonía de Vandor, obtuvo más votos que ningún otro partido político en las elecciones nacionales de diputados.

El éxito de la Unión Popular en las elecciones de marzo de 1965 marcó un hito decisivo en la iniciativa de Vandor para desarrollar un partido. A medida que "peronismo sin Perón" crecía en ímpetu, se movilizaban los adversarios de Vandor. Los líderes sindicales que temían ser eclipsados por el ascenso de Vandor, o que no estaban dispuestos a hacerse a un lado mientras convertían a Perón en un testafierro, empezaron a distanciarse del jefe de los metalistas. Entretanto, Perón envió a la Argentina a Isabel, su esposa con quien se había encontrado en Panamá durante sus primeros meses de exilio, para que solicitase apoyo para una campaña intraperonista en contra de Vandor. La confrontación decisiva se produjo en abril de 1966 cuando Vandor y Perón dieron su apoyo a candidatos diferentes en las elecciones de gobernador en Mendoza. Ninguno de los dos candidatos ganó, pero el de Perón obtuvo casi el doble de los votos que el de Vandor, demostrando que Perón, y no Vandor, sería la figura clave en la incorporación del peronismo a la política de partidos. Como advirtió un oficial del ejército: "Los resultados de las elecciones [de Mendoza demuestran que]... la ilusión de que todo podía resolverse en conversaciones con [Rodolfo] Tecera del Franco o [Augusto] Vandor terminaron definitivamente"<sup>39</sup>.

El colapso del proyecto de Vandor de desarrollar un partido echó abajo dos escenarios que podrían haber impedido un golpe militar. Mientras que Vandor esperaba que los militares nombrasen candidatos peronistas "acceptables" para las elecciones de gobernador de 1967, la UCRP esperaba que un empate entre Vandor y Perón debilitara suficientemente al peronismo para derrotarlo en elecciones leales. Al echar abajo ambos escenarios, la contienda electoral de abril de 1966 en Mendoza quitó un obstáculo que podría haber impedido el golpe de junio de 1966. Tal como sucedió con la Semana Trágica que acabó con la cultivación del movimiento obrero por Yrigoyen o con la disolución del Partido Laborista por Perón, el colapso de la iniciativa de Vandor marcó una oportunidad importante, pero desaprovechada, de fortalecer los vínculos entre sindicatos y partidos. Si hubiera tenido éxito, los militares, liberados de la triple pesadilla de Perón de vuelta en el poder, su propia desintegración institucional y los sindicatos "girando a la izquierda", podrían haber estado más dispuestos a aceptar la continuación del gobierno civil y una transición final a la democracia.

## GOBIERNO MILITAR Y RESTAURACIÓN PERONISTA, 1966-1983

Desde 1966 hasta 1983, la Argentina experimentó un gobierno militar relativamente moderado entre 1966 y 1973, un gobierno peronista elegido entre 1973 y 1976 y un gobierno militar mucho más severo entre 1976 y 1983. Estos años presenciaron cambios significativos

en la importancia de los partidos como actores políticos, en la dinámica de la competencia partidaria y en las organizaciones partidarias que representaban las identidades políticas principales del país: el peronismo y el radicalismo. También se produjo un cambio importante en el aprecio público de los partidos y los políticos. Encuestas de opinión pública inmediatamente después del golpe de 1966 mostraron que una pluralidad importante de argentinos estaba hastiada de los partidos políticos y pensaba que las cosas mejorarían bajo un régimen militar<sup>40</sup>. Para 1983, las alternativas a un gobierno de partidos políticos habían resultado tan devastadoras que los partidos principales se esforzaban deliberadamente para mejorar sus relaciones mutuas y los argentinos estaban valorizando la actividad partidaria y electoral de una forma sin precedentes.

Previo al golpe de 1966 los partidos políticos argentinos sobresalían, como hemos visto, por la poca capacidad que tenían de expresar, organizar y canalizar los intereses y las demandas de algunas de las clases sociales más importantes del país. Esta capacidad, que ya era baja, bajó mucho más durante los gobiernos militares subsiguientes. Al eliminar las elecciones y la actividad legislativa, éstos dejaron poco que los partidos podían ofrecer como vehículos de influencia en las políticas estatales. Durante estos períodos, algunos de los intereses y demandas previamente expresadas por los partidos se suprimieron, mientras que otros se articularon mediante negociaciones individuales o colectivas con funcionarios de los gobiernos militares, o mediante una política de veto de acción directa consistente en huelgas, manifestaciones, disturbios y actividad guerrillera. Entre 1973 y 1976, durante el gobierno peronista elegido, se abrió más espacio político para un papel partidario más grande, pero la brevedad y lo tumultuoso del período impidió que los partidos se hicieran valer como actores políticos importantes. La dictadura de 1976-1983 reprimió a los partidos aún más que su predecesor. No fue sino hasta después de la aventura militar fracasada del general Leopoldo Galtieri en el Atlántico Sur en 1982 que los partidos crecieron en importancia como actores políticos.

El general Juan Carlos Onganía (1966-1970) y el general Roberto Levingston (1970-1971) insinuaron una reestructuración de la política siguiendo un modelo corporativista, pero se esfumó la idea después que una insurrección en la ciudad de Córdoba en mayo de 1969 envalentonó a los grupos guerrilleros emergentes, precipitó un cambio desfavorable en la coyuntura económica e hizo que el apoyo se trasladara a una facción militar que privilegiaba la realización de elecciones. Después de asumir el cargo a mediados de 1971, Alejandro Lanusse, el nuevo presidente militar, llamó a elecciones para marzo de 1973, legalizó la actividad partidaria y permitió que el peronismo presentara candidatos bajo la etiqueta del Partido Justicialista (PJ)<sup>41</sup>. Lanusse también emitió un decreto que prohibía la postulación tanto suya como de Perón a la presidencia, lo que obligó al líder exiliado a designar a Héctor Cámpora como el candidato presidencial de una coalición electoral (FREJULI) que consistía en su propio PJ, el MID de Frondizi y varios otros partidos más pequeños y facciones de partidos. Cámpora no estaba vinculado en absoluto con los sindicatos y su designación fue otro golpe para los líderes sindicales que todavía tambaleaban como consecuencia de los asesinatos de Vandor (1969) y José Alonso, antigua cabeza de la CGT (1970). Debido al respaldo de Perón, Cámpora sí contaba con el apoyo de la izquierda y la juventud peronistas, quienes interpretaban las declaraciones ambiguas de Perón de diferentes maneras revolucionarias, algunas de las cuales parecían condonar la violencia guerrillera<sup>42</sup>. Después de la dura batalla que había lidiado con Vandor a principios de los sesenta, Perón estaba muy contento con el ascenso de los sectores jóvenes y de izquierda, quienes metían más ruido que los sindicatos pero eran más maleables. El retorno a las elecciones y la reinserción parcial del peronismo también abrieron espacios para candidaturas y cargos dentro del liderazgo del partido para los amigos personales e íntimos de Perón y para antiguos políticos peronistas, creando así más facciones que Perón podía oponer a los sindicatos y a los sectores jóvenes y de izquierda. De esa manera, Perón restauró su liderazgo plebiscitario mediando entre las diferentes facciones del peronismo (cada una de las cuales incluía varias subfacciones) al estilo de Bonaparte.

La cercanía de las elecciones de 1973 también provocó cambios en el radicalismo. Una decisión judicial de 1972 otorgó el uso exclusivo de la etiqueta UCR a la UCRP, obligando a lo que quedaba de la UCRI a cambiar su nombre al Partido Intransigente (PI). Más adelante en ese mismo año la UCR realizó una elección preliminar directa en la cual Ricardo Balbín, venerable y poco carismático, obtuvo más votos que Raúl Alfonsín, quien era más joven y más dinámico. Aunque perdió la elección preliminar ganada por Balbín, Alfonsín se mostró fuerte, presagiando su ascenso en 1983 a la presidencia de la UCR y finalmente de la Argentina. Los miembros de la facción Movimiento de Renovación y Cambio de Alfonsín tendían a ser más jóvenes y estar más a la izquierda que los partidarios de Balbín y a menudo hacían causa común con los estudiantes activistas de la Junta Coordinadora Nacional, una facción de la UCR formada en 1968 “para transformar la estructura burocrática y electoralista del radicalismo en un movimiento apto para enfrentarse a la dictadura”. El lenguaje usado por la Coordinadora, que incluía fases como “complejo antinacional oligárquico-monopólico-imperialista”, sobresalía en contraste con el reformismo más moderado de Balbín y hacía recordar algunos de los elementos movimentistas de la tradición radical<sup>43</sup>. En parte debido a sus vínculos con la Coordinadora, Alfonsín adquirió una reputación de “izquierdista” que, a juicio de muchos conservadores, retuvo durante todo el tiempo de su presidencia (de 1983 a 1989).

El peronista Cámpora ganó las elecciones de marzo de 1973 con poco menos del 50% de los votos; el que llegó segundo, Balbín, el candidato radical, obtuvo apenas un poco más del 20%. A pesar de su victoria aplastante, la presidencia de Cámpora no duró mucho. Una serie de tomas de lugares de trabajo, una ola de manifestaciones estudiantiles y la liberación de los guerrilleros encarcelados ya habían perturbado al país cuando el 20 de junio de 1973 decenas y quizás cientos de personas murieron en violentas confrontaciones entre peronistas del ala derecha y del ala izquierda que se habían reunido a lo largo de la carretera entre el aeropuerto de Ezeiza y el centro de Buenos Aires para darle la bienvenida a Perón<sup>44</sup>. Unas pocas semanas después Cámpora renunció y se traspasó la presidencia a Raúl Lastrí, quien llamó a nuevas elecciones en septiembre. En esta oportunidad, Perón y su esposa Isabel postularon como candidatos a la presidencia y vicepresidencia y obtuvieron el 62% de los votos contra 24% de Balbín. Perón se vio beneficiado con votos de desertores tanto de la izquierda como de la derecha, los primeros porque no tenían a quien más recurrir y los últimos porque esperaban que podría controlar a las guerrillas.

Las acciones de Perón habían contribuido en forma decisiva a la destrucción del Partido Laborista, a la debilidad del Partido Peronista original y al fracaso del proyecto de Vandor de desarrollar un partido. Sin embargo, durante su segundo período presidencial, que comenzó en octubre de 1973 y terminó con su muerte en julio de 1974, Perón se mostró más favorablemente dispuesto a la institucionalización del recientemente legalizado PJ. En un discurso dado en mayo de 1974, Perón anunció su intención de renunciar a la jefatura del movimiento peronista y concentrar sus fuerzas menguantes en la presidencia. Exhortó a sus seguidores para que fortalecieran al PJ y designaran líderes del partido que estuvieran comprometidos con la democracia<sup>45</sup>. Sin embargo, no está claro cuán en serio hablaba Perón: durante el período de 1946-1955 Perón había hablado de “organizar” el movimiento, mientras al mismo tiempo fomentaba activamente su desorganización. En todo caso, su muerte dejó el PJ con una institucionalidad tan débil como la del Partido Peronista hace veinte años.

La breve presidencia de Perón sí evidenció cambios importantes en las relaciones entre el peronismo y el radicalismo. Entre 1955 y 1966 la mayoría de los partidos apostaba con la opción militar cuando les convenía, consintiendo a los golpes en la esperanza de que un gobierno militar designaría a sus líderes en los cargos más altos o que cambiaría el balance de las fuerzas políticas a su favor. Sectores de la UCRP apoyaron abiertamente una intervención militar antes del desposeimiento de Frondizi. Frondizi recibió con beneplácito el derribo de Illia y varios líderes sindicales peronistas alentaron el golpe de 1966<sup>46</sup>. Después de 1969, empezó a cambiar este comportamiento porque la mayoría de los líderes

peronistas y radicales coincidieron en un interés común de echar al gobierno militar y combatir la izquierda insurreccionista. La formación en 1970 de la coalición Hora del Pueblo, donde el radicalismo y el peronismo se comprometieron a trabajar juntos para poner fin a la proscripción y apoyar a un régimen democrático sin importar quien fuera el vencedor, reflejó una atenuación de la percepción de cada partido de sí mismo como un movimiento mayoritario y presagió la emergencia de un sistema de partidos institucionalizado. Sin embargo, este proceso sólo llegó a madurar en 1983. El acercamiento entre el peronismo y el radicalismo a principios de los años setenta dependía en gran medida de las relaciones personales entre Perón y Balbín. Como ha observado Marcelo Cavarozzi, la política de Balbín de una "oposición constructiva" al gobierno peronista, que en la práctica significaba apoyar todas sus acciones por temor a que la crítica constituiría una invitación a un golpe, no contribuía a la institucionalización de la competencia partidaria porque dejaba poco espacio para una postura opositora que serviría de plataforma de gobierno después de las próximas elecciones<sup>47</sup>.

El 1 de julio de 1974 murió Perón y fue sustituido por su viuda, la vicepresidenta Isabel Martínez de Perón. La falta de experiencia política de Isabel, junto con el apoyo ostensible brindado por Perón a la institucionalización de los partidos en las semanas previas a su muerte, crearon un espacio dentro del cual el PJ podría haberse convertido en un actor de más importancia. En cambio, fuerzas centrífugas que antes habían sido controladas por Perón dividieron violentamente el movimiento. Luego de la muerte de Perón, el poder dentro del peronismo se dispersó entre los sindicatos, la izquierda y una camarilla en torno a José López Rega, el Ministro de Bienestar Social, una figura tipo Rasputín que se metía en las ciencias ocultas y funcionaba como el poder detrás del trono durante el primer año de la presidencia de Isabel Perón. Identificado con la extrema derecha, López Rega organizó un escuadrón de la muerte denominado la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). A fines de 1974 los líderes sindicales conservadores apoyaron su campaña por expulsar de las gobernaciones y de otros cargos a la izquierda peronista, pero en julio de 1975, en respuesta a un programa de estabilización, la CGT llamó a una huelga general de dos días —la primera contra un gobierno peronista— que le obligó a renunciar. Sin embargo, acostumbrados a un papel opositor los sindicatos no fueron capaces de llenar el vacío de poder. La inflación y la violencia política siguieron aumentando en forma acelerada y en marzo de 1976 los militares se apoderaron del gobierno.

Como resultado del golpe se instaló una dictadura militar bajo el general Jorge Videla (1976 a 1981), cuya meta más inmediata era eliminar a las guerrillas y a sus supuestos simpatizantes. Como lo explicó Luciano Menéndez: "Vamos a tener que matar a 50.000 personas: 25.000 subversivos, 20.000 simpatizantes y nos equivocaremos 5.000 veces"<sup>48</sup>. La resistencia a este plan macabro se veía debilitada por un ambiente de temor generado por la violencia política que cobró más de 1.000 vidas entre mayo de 1973 y marzo de 1976. La Comisión Nacional Sobre la Desaparición de las Personas, designada por Alfonsín poco después de su investidura en diciembre de 1983, documentó la desaparición de 8.960 personas durante el régimen militar<sup>49</sup>. Para asegurar que nunca más resurgieran las actividades subversivas, los militares idearon una estrategia para acabar con las crisis económicas, las instituciones sociales y la contaminación ideológica que se tenían como responsables por dichas actividades subversivas. La estrategia se basaba en un programa para reemplazar los subsidios estatales, la industria ineficiente y las restricciones comerciales por un modelo económico de libre mercado basado en las exportaciones agrícolas, sector en el cual se creía que la Argentina contaba con ventajas comparativas. El modelo económico no sólo reduciría los déficit presupuestarios y la escasez de divisas que se culpaban por las crisis económicas del país, sino que también reduciría el tamaño de la clase obrera industrial que se percibía como el principal contribuyente a la inestabilidad política y económica del país. La CGT y algunas asociaciones de empresarios fueron clausuradas y los periodistas que no apoyaban al régimen abiertamente fueron hostigados, exiliados, asesinados o simplemente "desaparecieron".

Aunque se prohibió el funcionamiento de todos los partidos políticos después del golpe de marzo de 1976, la UCR aventajaba al PJ en tres aspectos: menos de sus líderes fueron

reprimidos; no estaba experimentando una crisis de sucesión; y gozaba de una mejor institucionalización. El mayor espacio de maniobra que tenía la UCR la convirtió en el impulsor principal de la Multipartidaria, una coalición de partidos formada en 1981 (la UCR, PJ, PI, MID y Demócratas Cristianos), que cabildó al gobierno efímero del general Roberto Viola en búsqueda de una apertura política<sup>50</sup>. Igual que la coalición Hora del Pueblo de 1970-1973, la Multipartidaria surgió del interés común de los partidos por la democratización y contribuyó al desarrollo de un ambiente de confianza interpartidaria que terminó por fomentar la institucionalización de un sistema de partidos.

Las relaciones entre los partidos principales y el gobierno militar se deterioraron en diciembre de 1981 cuando el general Galtieri despojó a Viola y, cinco meses después, inició el conflicto del Atlántico Sur con Gran Bretaña. La derrota sufrida por la Argentina tuvo un efecto catalizador en el oprobio de la población que se había estado formando durante varios años como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos y de una crisis económica cuyos precipitantes, una moneda sobrevalorizada y aranceles de importación bajos, habían causado la fuga de capitales, el colapso de industrias que competían con las importaciones y quiebras bancarias. A diferencia del gobierno de Lanusse de 1971-1973 (y a diferencia de los más recientes gobiernos militares en Brasil, Chile y Uruguay), el gobierno militar de la transición heredó un régimen tan desacreditado como consecuencia de la derrota militar, el colapso económico y las violaciones a los derechos humanos, que no pudo suscribir un acuerdo con los políticos civiles para resguardar sus intereses a cambio de su alejamiento de la política.

Debido en parte a que por causa de la violencia de los años setenta las instituciones democráticas formales se veían más atractivas que durante los años sesenta, la campaña electoral de 1983 evidenció un surgimiento sin precedentes en la actividad partidaria. Casi el 25% de los votantes calificados se hicieron miembros de un partido político. El PJ por sí solo adquirió más de tres millones de miembros, de los cuales, según se informó, casi el 60% votaron en las elecciones preliminares indirectas del partido en 1983. Sin embargo, a nivel de liderazgo, ambos partidos enfrentaban desafíos mayores. En el PJ, Lorenzo Miguel, líder de los metalistas, quien siguiendo los pasos de Vandor se había convertido en el líder principal del movimiento peronista, llenó el vacío dejado por la muerte de Perón. Miguel planeó la designación de Italo Luder como candidato presidencial del partido, escogió muchos de los candidatos peronistas designados para las elecciones nacionales de diputados y fue designado primer vicepresidente, el cargo máximo de liderazgo efectivo en el PJ<sup>51</sup>. En la UCR, como consecuencia de la muerte de Balbín en 1981, Alfonsín aparecía como el heredero forzoso, pero antes de ser designado tuvo que defenderse ante la competencia de Fernando de la Rúa de la Línea Nacional de Balbín. A diferencia del peronismo, donde existían pocas diferencias ideológicas o de estilo entre los candidatos y se designaba el candidato en forma indirecta (y de hecho por arreglos entre bambalinas), Alfonsín se situaba a la izquierda ideológica de Rúa, privilegiaba convertir a la UCR en un partido de más movilización y se vio obligado a ganar la designación de su candidatura mediante una elección preliminar directa.

El 30 de octubre de 1983 Alfonsín derrotó a Luder obteniendo el 50% de los votos contra el 39% de su adversario, la primera vez en la historia que el peronismo perdía una *elección nacional de importancia*. Cinco factores ayudan a explicar este resultado sin precedente. En primer lugar, la desindustrialización entre 1976 y 1983 había erosionado la base electoral tradicional del peronismo<sup>52</sup>. Segundo, Alfonsín obtuvo el apoyo de los obreros que quedaban, obteniendo más votos que Luder en muchos suburbios industriales de Buenos Aires. Tercero, muchos votantes de centro-derecha aparentemente optaron por Alfonsín: el porcentaje de los votos de los partidos de centro derecha cayó del 21% en marzo de 1973 al 2% en octubre de 1983. Muchos de la centro derecha pueden haber votado por Alfonsín como el candidato que más posibilidades tenía de evitar la repetición de los acontecimientos de 1973-1976<sup>53</sup>. Cuarto, la UCR montó una mejor campaña que el PJ, cuya imagen estaba manchada por la designación entre bambalinas de Luder, por rumores de un "pacto

sindical-militar” y por una reunión política en la víspera de las elecciones donde Herminio Iglesias, el candidato a gobernador de Buenos Aires, quemó un falso ataúd con las letras “U.C.R.” vívidamente escritas en él, un gesto que no agradó a un pueblo que estaba cansado después de una década de violencia. Quinto, y el más importante, la UCR cultivó una imagen donde se retrataba como el partido interesado en la democracia formal, la tolerancia y los derechos humanos, mientras que el peronismo siguió retratándose como el partido del nacionalismo, la intransigencia y el populismo. Después de un período devastador entre 1973 y 1983, muchos argentinos simplemente estaban más favorablemente dispuestos a lo que ofrecía el radicalismo. A pesar de una profunda crisis económica, el ambiente político en 1983 se veía más auspicioso para una consolidación democrática que cualquier otro momento en la historia del país.

## **LOS PARTIDOS Y EL SISTEMA DE PARTIDOS ARGENTINO, 1983-1991**

Durante la década del ochenta, el peronismo y el radicalismo comenzaron a actuar más como partidos en búsqueda de votos que como movimientos en búsqueda de rehacer el orden político. El peronismo tenía más distancia que avanzar en esta dirección que el radicalismo; sin embargo, algunos adherentes de la UCR habían tratado en una oportunidad de eliminar al peronismo del campo político. Las dos fuerzas políticas retuvieron ciertas características movimentistas, pero ninguno de los dos evidenció los aspectos del movimentismo más adversos a la consolidación democrática: una vocación hegemónica y una visión ecléctica de los caminos más aptos para alcanzar el poder. El peronismo y el radicalismo llegaron a reconocerse mutuamente como participantes legítimos y duraderos en la política y se abstuvieron de fomentar la intervención militar, amenazar con la insurrección y aprovecharse indebidamente de su ocupación del gobierno a expensas del adversario.

Esta reconciliación fue fomentada por una serie de cambios que coincidieron después de 1970 y sirvieron para aminorar el conflicto entre el peronismo y el antiperonismo. Al prohibir todos los partidos políticos, Onganía creó la convergencia de intereses cuyo resultado fue la unión del peronismo, el radicalismo y otros partidos menores en la coalición Hora del Pueblo. Poco después, Perón y Balbín entablaron una amistad que fortaleció esta cooperación interpartidaria. La mejoría en las relaciones entre el peronismo y el radicalismo también se debió a acontecimientos más siniestros: una lucha a muerte entre una izquierda milenaria y sus verdugos autodesignados, y el terrorismo del Estado durante la dictadura de 1976-1983. Los acontecimientos terribles de la década del setenta hicieron que muchos peronistas y radicales analizaran si aspectos de su propio comportamiento habrían contribuido a estos eventos. Otro acontecimiento que originó un cambio en las relaciones entre peronistas y radicales fue la victoria presidencial de Alfonsín en 1983, la que permitió que el radicalismo experimentara, por primera vez desde 1928, lo que significaba encabezar un gobierno elegido lealmente, y que el peronismo experimentara, por primera vez en la historia del país, lo que significaba estar en oposición a uno. Esta reconciliación marcó un paso importante hacia la evolución de un sistema de partidos: una relación entre partidos donde ninguno de los partidos apuesta a la opción militar ni busca eliminar a sus adversarios de la contienda política.

El mayor aprecio público de los partidos políticos también fomentó la emergencia de un sistema de partidos. Antes de mediados de la década del setenta, muchos argentinos pensaban que el país se gobernaba mejor con disposiciones corporativistas, líderes plebiscitarios u oficiales militares, más bien que con políticos de partidos. Luego de este punto bajo, el aprecio por los partidos aumentó irregularmente; sin embargo, para principios de la década del ochenta un gobierno de políticos de partidos, aun de los como Illia que se eligieron deslealmente, se veía mejor retrospectivamente que el plebiscitismo desinflado de Isabel Perón o el terrorismo de Estado de Videla. Además, en las elecciones presidenciales de 1983 el radicalismo apareció como una opción alternativa creíble al peronismo. A pesar de sus raíces en el movimentismo (y sus ramas movimentistas), siempre se había considerado que la UCR era el más acabado partido político argentino. A través de los años, el prestigio de los partidos

había llegado a depender en cierto grado de si se percibía a la UCR como capaz de ganar una elección leal y desempeñar un buen gobierno. Para muchos argentinos, el débil desempeño electoral del radicalismo bajo Perón, su aquiescencia frente a la proscripción de Perón y su renuencia a tomar el mando cuando se desmoronó el gobierno de Isabel Perón indicaban que la UCR era electoralmente impotente y también incapaz de gobernar. La campaña presidencial de Alfonsín en 1983 ayudó a revertir estas percepciones. Al promover enérgicamente los derechos humanos y la competencia política abierta, reconocer al peronismo como un competidor electoral legítimo y denunciar públicamente un supuesto "pacto sindical-militar", Alfonsín demostró un liderazgo relativamente inspirador, aminoró la asociación del partido con la proscripción del peronismo y retrató a la UCR como una alternativa viable al PJ. La campaña de Alfonsín y los recuerdos amargos de los años setenta causaron una revalorización de los partidos. Según se informa, para 1984 el 84% de los encuestados evaluaban a los partidos positivamente. En 1988, a pesar de la peor crisis económica en la historia moderna de la Argentina, la cifra siguió alta, alcanzando un 63%<sup>54</sup>.

### LAS BASES DEL PARTIDISMO Y LA ALINEACIÓN ELECTORAL

Un cambio en las bases del partidismo y la alineación electoral contribuyó al fortalecimiento del sistema de partidos que emergió después de 1983. Antes de la década del ochenta, ser radical o peronista implicaba participar en una subcultura que rechazaba cualquier gobierno del adversario. El peronismo se proclamaba el único representante legítimo del pueblo, mientras que el radicalismo se autorretrataba como la única fuerza política importante capaz de operar de una forma compatible con un régimen democrático<sup>55</sup>. A medida que la reconciliación entre los partidos y la experiencia de la violencia política comenzaban a erradicar estas diferencias subculturales, se podría haber esperado que la ideología y el programa comenzarían a jugar un papel más importante en la determinación del partidismo y la alineación electoral, pero no fue así. Las encuestas de mediados de la década del ochenta mostraban que los adherentes del PJ y de la UCR diferían poco en cuanto a autoposicionarse en una escala ideológica izquierda-derecha, o en cuanto a temas claves relacionados, como por ejemplo el papel del Estado en la economía. Por otra parte, ambos partidos montaron sus campañas de 1983 basadas en una plataforma donde se abogaba por un papel económico fuerte para el Estado y la protección de la industria nacional frente a la competencia extranjera<sup>56</sup>. Durante la campaña presidencial de 1989 se produjo una divergencia programática entre el peronismo y el radicalismo cuando Carlos Menem del PJ reafirmó la mayoría de los aspectos del viejo modelo de desarrollo nacionalista, estatista y de redistribución, mientras que Eduardo Angeloz de la UCR gravitó hacia la nueva ortodoxia del libre mercado. Sin embargo, una vez ocupando el cargo, Menem empezó a promulgar las políticas de la plataforma electoral de Angeloz. Para fines de 1991, los partidos nuevamente abogaban por políticas económicas similares, aunque la UCR, protegida por ser la oposición, podía darse el lujo de reclamar que los peronistas las estaban implementando de una manera demasiado severa.

Lo que reemplazó a la orientación subcultural como la razón principal de la selección electoral no fue ni la ideología ni el programa, sino el rendimiento percibido del partido que ocupaba el poder<sup>57</sup>. Los argentinos empezaron a preguntar al partido gobernante: "¿Qué has hecho por mí últimamente?" y si no les gustaba la respuesta, a votar por la oposición. De todos los factores que contribuían a formar la percepción que tenía el electorado del rendimiento del partido gobernante, el más decisivo era la crisis económica. Durante los cinco años y medio de la presidencia de Alfonsín, los salarios reales cayeron en un 50%, el desempleo y el subempleo se duplicaron y una inflación alta y relativamente constante se convirtió en una hiperinflación acelerada. Los resultados electorales fueron un fiel reflejo del rendimiento económico. En las elecciones legislativas de noviembre de 1985, cuando el primer plan económico mostraba buenos resultados, los radicales vencieron a los peronistas obteniendo el 43% de los votos contra el 35% de los peronistas. Para septiembre de 1987, una

vez que el plan se había desdibujado, los peronistas vencieron a los radicales con el 43% contra el 37% de los votos. Para mayo de 1989, cuando se realizaron las elecciones presidenciales, el país sufría una recesión aguda y una hiperinflación y los peronistas ganaron su victoria más aplastante hasta la fecha, obteniendo el 47% de los votos contra el 37% de los radicales<sup>58</sup>. Las encuestas de opinión pública sustentan la teoría de que la preferencia electoral reflejaba el rendimiento económico. En noviembre de 1988, los encuestados otorgaban puntos positivos al gobierno de Alfonsín por respetar los derechos humanos y asegurar la estabilidad democrática, pero puntos negativos en tales temas como la creación de empleos, seguridad laboral y estándares de vida (problemáticas priorizadas por la mayoría de los encuestados). En una encuesta de votantes que optaron por el peronismo en las elecciones de septiembre de 1991, cuatro de cada cinco dijeron que lo habían hecho "por apoyo al plan económico [de marzo 1991]" (que bajó la inflación y produjo un aumento económico veloz) y sólo uno de cada cinco que lo había hecho "por tradición"<sup>59</sup>.

### ¿UN SISTEMA BIPARTIDARIO?

El sistema de partidos argentino actual se parece mucho a una configuración que ha existido durante décadas. Desde las reformas electorales de 1912, ningún partido que no sea el radicalismo o el peronismo ha producido un presidente de elección popular. Aun Justo (1932 a 1938) y Ortiz (1938 a 1940), quienes fueron elegidos deslealmente durante una era de predominio conservador, eran radicales antipersonalistas. Ya que el peronismo y el radicalismo han predominado durante tanto tiempo, es tentador concluir que la Argentina tiene un sistema bipartidario. Una medición superficial de las fuerzas electorales y el apoyo de miembros partidarios sustentan dicha interpretación. En cinco elecciones legislativas directas entre 1983 y 1991 la media de la votación combinada de la UCR y el PJ correspondió al 84%. Los partidos de la izquierda sólo lograron el 7%, y los partidos de la derecha, mayormente operando en una sola provincia, sólo obtuvieron el 11%. Las estadísticas en cuanto a los miembros partidarios también sustentan la idea de un predominio bipartidario: 79% de los 5,6 millones de ciudadanos que se inscribieron en 1983 como miembros de un partido político lo hicieron con ya sea el PJ (54%) o la UCR (25%)<sup>60</sup>. No existe mucha probabilidad en el futuro cercano de que un partido que no sea el peronismo o el radicalismo gane una elección presidencial.

A pesar de la evidencia que sustenta la teoría bipartidaria, durante la década del ochenta los "terceros" partidos fueron suficientemente significativos como para no aceptarla así no más. La media de la votación de los terceros partidos en la Argentina entre 1983 y 1991 correspondió al 20%, mucho más que en los Estados Unidos. Es más, en el Congreso los terceros partidos eran suficientemente fuertes como para hacer que se aprobara o se rechazara una legislación crucial. En 1984 los radicales presentaron un proyecto de ley diseñado para la democratización de los sindicatos (y la reducción de la influencia peronista en ellos). El proyecto de ley fue aprobado fácilmente en la Cámara Baja, donde los radicales tenían una mayoría, pero fue derrotado en la Cámara Alta, donde el PJ tenía veintinueve senadores, la UCR dieciocho, y los terceros partidos siete: uno del MID de Frondizi y dos cada uno de los partidos provincianos de San Juan, Corrientes y Neuquén. Con el apoyo de los senadores del MID y de Neuquén, el PJ derrotó el proyecto de ley en la Cámara Alta por 24 votos a 22.

A comienzos de la década del noventa, los partidos de San Juan, Corrientes y Neuquén representaban los terceros partidos más importantes en términos legislativos, pues ningún partido individual en la Cámara de Diputados controlaba un bloc de votos tan grande. Sin embargo, en términos electorales y de la formación de ideas, el tercer partido más importante era la Unión del Centro Democrático (UCeDé). La UCeDé emergió poco antes de las elecciones de 1983 liderada por Alvaro Alsogaray, quien por largo tiempo había abogado por políticas de libre mercado. Su participación del voto de la Cámara Baja aumentó del 1,7% en 1983 al 9,9% en 1989, y su cuota de diputados aumentó de dos a once. Sin embargo, existieron tres factores que impidieron que la UCeDé ampliara el alcance de su atractivo. En

primer lugar, el 90% de los votos de la UCeDé se encuentran concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires<sup>61</sup>. En otras regiones la participación electoral conservadora es más débil o ha sido captada por partidos provincianos autónomos. En segundo lugar, dándose cuenta de que es poco probable que el partido gane la presidencia u obtenga un bloc grande de escaños legislativos, muchos partidarios potenciales de la UCeDé votan por el radicalismo o el peronismo. En tercer lugar, en 1989-1990 tanto la UCR como el PJ comenzaron a apoyar políticas económicas de libre mercado, dejando la UCeDé sin una agenda distintiva, víctima de la repentina popularidad de las ideas económicas que sustentaba. En consecuencia, entre la elección presidencial de mayo de 1989 y las elecciones legislativas de septiembre de 1991, el porcentaje de los votos nacionales de diputados de la UCeDé cayó estrepitosamente por 60 puntos porcentuales en la Capital Federal y 35 puntos porcentuales en la provincia de Buenos Aires.

Los terceros partidos crecieron en importancia entre 1983 y 1989 y aumentaron su cuota de escaños en la Cámara Baja de 14 a 44 y su porcentaje de los votos del 11% al 25%<sup>62</sup>. Es más, la convergencia del PJ, la UCR y la UCeDé en torno a un conjunto de políticas económicas parecidas (convertibilidad monetaria, austeridad monetaria, privatización de compañías estatales, reducción de los aranceles de importación, reducción de subsidios a la industria, menos y más pequeñas exenciones tributarias, una recaudación más enérgica de impuestos, menos gastos de bienestar social, despidos de empleados públicos, restricciones a las huelgas y reducción de salarios) abrió espacios políticos para terceros partidos que abogaban por un regreso al nacionalismo y al estatismo y que estaban dispuestos a utilizar temas extraeconómicos para explotar la frustración resultante de los costos del ajuste, o que eran capaces de utilizar recursos de favores políticos para aliviar parte de dichos costos. En consecuencia, aunque el PJ obtuvo buenos resultados en las elecciones de gobernador y legislativas de 1991 (en gran parte debido al plan económico de febrero de 1991 que redujo la inflación y reavivó el crecimiento económico), también lo hicieron los partidos provincianos y de extrema derecha.

¿Cómo, pues, se debe definir el sistema de partidos argentino actual? Sartori define a los sistemas de partidos en función de dos dimensiones: la fragmentación y la distancia ideológica. La Argentina se define más nitidamente como un caso de "mediana" fragmentación: aunque no existe mucha probabilidad en el futuro cercano que un tercer partido gane una elección presidencial, los terceros partidos representan un muy respetable 20% del electorado en las elecciones legislativas de la Cámara Baja, 21% de los miembros de partidos y un número influyente de escaños en la legislatura. En términos de distancia ideológica, el sistema de partidos argentino se define mejor como "moderado". Tiene espacio para MODIN, el partido de extrema derecha liderado por el coronel Aldo Rico, así como también para partidos de la extrema izquierda y reconocidamente "antisistema" como el Movimiento al Socialismo, pero los dos partidos principales, la UCR y el PJ, se han situado ideológicamente por mucho tiempo en el centro, por lo menos hasta que ambos cambiaron paralelamente hacia la centro-derecha. En términos de Sartori, pues, la Argentina se encontraría en algún punto entre los tipos "multipartidista moderado" y "bipartidista"<sup>63</sup>. Sin embargo se deben añadir dos advertencias a esta evaluación. En primer lugar, tanto el radicalismo como el peronismo han incluido facciones de izquierda y de derecha bien afianzadas, así que la distancia ideológica al interior de cada partido es mayor que entre los dos. En segundo lugar, el concepto de "distancia ideológica" no capta la fuerte polarización subcultural (no ideológica) que por tantos años diferenció al radicalismo del peronismo.

## LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS: DIVISIONES SOCIALES Y REGLAS CONSTITUCIONALES

Tal como lo han argumentado Mainwaring y Scully en la Introducción de este libro, las perspectivas para la construcción de instituciones democráticas dependen más de la capacidad de los sistemas de partidos para mediar en los conflictos sociales que del número de partidos o la distancia ideológica entre ellos. Sin embargo, el grado de fragmentación sí da cuerpo a los

dilemas que enfrentará el sistema de partidos al mediar en dichos conflictos. Si el grado de fragmentación del sistema de partidos es alto, el resultado podría ser un atolladero político; si personas individuales o grupos se sienten insatisfechos con la gama de opciones ofrecidas por el sistema bipartidario dominante, podrían alejarse de los partidos como vehículos de expresión política. Por lo tanto, para identificar los constreñimientos que pesan sobre la construcción de instituciones democráticas, debemos analizar los factores que contribuyen a determinar el número de partidos en un sistema. Entre los determinantes más importantes del número de partidos en un sistema se encuentran las cuatro divisiones sociales identificadas por Lipset y Rokkan (Iglesia-Estado, centro-periferia, rural-urbana, empleador-trabajador), y las reglas constitucionales y electorales (especialmente las que están referidas a las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, el sistema electoral y el federalismo)<sup>64</sup>. La estructura divisiva de la Argentina fomenta un sistema bipartidario, mientras que el efecto de las reglas constitucionales es mixto: algunas promueven un sistema bipartidario y otros un sistema multipartidario.

La división Estado-Iglesia en la Argentina fue relativamente moderada y no generó partidos políticos. En la década de 1880, el PAN permitió casamientos civiles y puso fin a la instrucción religiosa en los colegios públicos, pero el anticlericalismo en la Argentina de fines del siglo diecinueve era más débil que en Chile, Ecuador, Venezuela o México<sup>65</sup>. Es más, los que se oponían a estos cambios secularizadores no formaron su propio partido político. El partido radical, aunque se parecía por nombre al partido secularista de Chile, no era anticlerical; incluso atrajo a algunos que se oponían al secularismo del PAN<sup>66</sup>. Se formó un Partido Demócrata Cristiano en 1954, pero obtuvo menos del 1% del voto presidencial en 1983 y nunca llegó a superar el 5% en una elección legislativa. La división centro-periferia, significativa y generadora de partidos en Colombia y Uruguay, se resolvió mayormente en la Argentina cuando la ciudad de Buenos Aires se federalizó en 1880<sup>67</sup>. Los partidos provincianos persisten en la Argentina, pero principalmente debido al clientelismo local y a la presencia de fuertes instituciones federales. Por otra parte, no existe ninguna división centro-periferia que haya influido significativamente en la generación de ya sea el Partido Radical o el Partido Peronista, y no existe ninguna hoy en día que diferencie las áreas de su fuerza electoral. La UCR es fuerte en Córdoba y la Capital Federal, mientras que el PJ gana las elecciones en las provincias poco pobladas al norte y noroeste de la Pampa, pero, salvo aquello, el apoyo por los partidos principales se encuentra disperso más o menos equitativamente a través de todo el país. El poder generativo de la división rural-urbana es bajo porque la Argentina es altamente urbanizada (más que los Estados Unidos) y carece de un campesinado sedentario suficientemente grande como para hacer viable un partido rural. Los hacendados no han tenido representación en la política de partidos desde la década del treinta, y su éxito electoral en esa época dependía de la proscripción o el fraude. Por último, hasta el momento las divisiones postmaterialismo no han evidenciado ningún efecto fuerte de generación de partidos en la Argentina. Algunos partidos de reciente formación han apelado respectivamente a los jubilados, los ambientalistas y los "humanistas", pero estos partidos nuevos aún no han demostrado fuerza para resistir ni tampoco algo más que una capacidad nominal de captación de votos.

Desde mediados de la década del cuarenta, cuando Perón llegó al poder sobre los hombros de la clase obrera urbana, la principal división generadora de partidos en la Argentina ha sido la división empleador-trabajador. La tendencia de los obreros rurales y urbanos ha sido apoyar al peronismo, mientras que la tendencia de las clases media y alta ha sido apoyar al radicalismo u otros partidos de izquierda, de centro o conservadores más pequeños. Tanto el radicalismo como el peronismo han evitado los llamados abiertos a las clases y ambos han enfatizado que son partidos multiclasistas; sin embargo, el peronismo normalmente ha atraído a los sectores menos privilegiados y el radicalismo a los más privilegiados. Las subculturas que por tanto tiempo separaron a los dos partidos contienen otras antinomias (por ejemplo, "la gente común" y "oligarquía", "totalitario" y "demócrata"), pero la antinomia de clases se

matiza con las otras. Por lo tanto, la división de clases es fuerte y generadora de partidos en la Argentina, mientras que las otras no la son. Esta estructura ayuda a explicar por qué la Argentina se aproxima más a una configuración bipartidaria que Chile, donde dos conjuntos de divisiones clasistas generadoras de partidos (urbana y rural) se superpusieron a un sistema de partidos que ya estaba estructurado en torno a la división Iglesia-Estado<sup>68</sup>.

No solamente las divisiones sociales sino también las reglas electorales y constitucionales han contribuido a la configuración del sistema de partidos argentino. El sistema presidencial ha agravado a los terceros partidos porque ha creado un premio supremo e indivisible que sólo se puede ganar mediante la movilización de una coalición amplia<sup>69</sup>. La tendencia de los presidentes argentinos de gobernar por decreto, pasando por alto al poder legislativo, y de intervenir en las provincias, reemplazando a líderes locales de elección popular por fideicomisarios designados, ha reducido el peso político del Congreso y de los gobiernos provinciales, que son precisamente los foros donde en un sistema presidencial los terceros partidos gozan de mayor poder potencial. La coincidencia cada seis años de las elecciones presidenciales y legislativas de la Cámara Baja también ha creado una situación donde se induce a los votantes a votar por los legisladores de los partidos de los principales candidatos presidenciales. Por lo tanto, el presidencialismo, el predominio del poder ejecutivo y la coincidencia de las elecciones presidenciales y legislativas han fortalecido la configuración bipartidaria que surgió de la estructura divisiva de la Argentina.

Además de su impacto sobre el sistema de partidos, el presidencialismo también tiene un efecto directo y negativo sobre la estabilidad democrática. El presidencialismo tiende a reforzar el personalismo, fomentar un enfoque a la política de "el ganador se lleva todo" y producir un atolladero entre los poderes ejecutivo y legislativo<sup>70</sup>. Es más, debido a que los regímenes presidenciales implican un mandato fijo, no es posible remover a un jefe de gobierno que ha perdido la credibilidad pero que no se ha comportado de forma tal como para merecer un juicio de destitución. Los Presidentes Arturo Illia e Isabel Perón, quienes para el segundo año de sus mandatos respectivos ya habían sido desacreditados, podrían haber sido removidos en un sistema parlamentario por un voto de censura, eliminando de esa forma los vacíos de liderazgo que contribuyeron a los golpes de 1966 y 1976.

Aunque algunas de las reglas constitucionales y electorales de la Argentina han privilegiado un sistema bipartidario, otras han privilegiado un sistema multipartidario. De especial importancia en este aspecto es el sistema electoral proporcional de miembros múltiples que rige para la Cámara Baja<sup>71</sup>. Los líderes de partidos de cada uno de los 23 distritos electorales (22 provincias y la Capital Federal) preparan listas de candidatos a diputado nacionales y el voto se emite para una lista entera. El porcentaje del voto recibido por cada lista determina cuántos de sus candidatos llegan a ser diputados<sup>72</sup>. Bajo este sistema, hasta las listas que obtienen un número relativamente pequeño de los votos pueden esperar ganar al menos algunos escaños, así que los votantes no deben preocuparse tanto por malgastar su voto como lo harían bajo un sistema pluralista de un solo miembro. (En consecuencia, en 1991 los terceros partidos tenían 44 escaños de los 254 escaños en la Cámara de Diputados de la Argentina, pero sólo 1 de 435 escaños en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos). El federalismo es otro aspecto de la estructura constitucional de la Argentina que contrarresta el imperativo bipartidario que deriva del presidencialismo y el predominio del poder ejecutivo. De hecho, el federalismo divide el premio (recursos estatales) en segmentos a los que un partido que es fuerte en ciertas provincias pero débil o inexistente en otras puede optar. Los gobiernos provinciales de la Argentina constituyen "premios" importantes porque controlan recursos importantes, especialmente empleos<sup>73</sup>. Por otra parte, ya que los dos senadores nacionales de cada provincia argentina son elegidos por los legisladores provinciales, los candidatos de terceros partidos tienen menos desventajas que si fueran elegidos por los ciudadanos comunes, como sucede en la Capital Federal. Cuando en una elección popular las elecciones senatoriales y presidenciales coinciden, los candidatos a

senador de terceros partidos tienen que sobreponerse a la tendencia normal de los votantes de votar por la lista del partido nacional de mayor envergadura.

Por lo tanto, las divisiones sociales y las reglas constitucionales han configurado el sistema de partidos argentino. El predominio preponderante de la división clasista ha privilegiado un sistema bipartidario. Algunas de las reglas constitucionales del país, como el sistema presidencial, el dominio del poder ejecutivo y la coincidencia de las elecciones presidenciales y legislativas han privilegiado un sistema bipartidario, pero otras, como el sistema electoral proporcional para la Cámara de Diputados, el federalismo y el sistema electoral indirecto para el Senado han privilegiado un sistema multipartidario. Dado el equilibrio de imperativos, no sorprende que el sistema de partidos argentino se sitúe entre los dos tipos: bipartidario y multipartidario. Según el sistema elaborado por Laakso y Taagepera, la media del "número efectivo" de partidos parlamentarios de la Argentina entre 1983 y 1989 fue 2.5, parecido a Australia, Canadá y Alemania Occidental<sup>74</sup>.

### MOVIMENTISMO EN LA DÉCADA DEL OCHENTA

Durante la era de Yrigoyen, el radicalismo mostró una vocación hegemónica, un enfoque de "todo vale" para alcanzar y retener el poder y plebiscitismo, todos aspectos del movimentismo que más adelante se constituirían en características del peronismo. En los años treinta y cuarenta, ramas y facciones de la UCR mostraron tendencias movimentistas, y en los años cincuenta y sesenta lo hicieron el MID y la UCRI de Frondizi. Oscar Alende, quien heredó la UCRI en 1963, proporcionó un gran ejemplo del enfoque de "todo vale" cuando solidarizó con el intento cívico del general Levingston de encabezar un movimiento nacionalista diseñado para absorber la movilización que produjo la insurrección de 1969 en Córdoba. En los años ochenta, el PI (nombre evocativo de "Partido Intransigente") de Alende participó en manifestaciones callejeras en Buenos Aires donde se juntó un gran contingente de manifestantes cuya cantidad impresionaba por estar absolutamente fuera de proporción con la cada vez más baja atracción electoral del partido.

En años recientes, el énfasis sobre movimentismo en la UCR ha provenido mayormente de la Junta Coordinadora Nacional (conocida normalmente como la Coordinadora), una facción partidaria formada en 1968 por estudiantes y miembros del ala juvenil de la UCR. La Coordinadora apoyó a Alfonsín en las elecciones preliminares de la UCR en 1983, invistiendo su candidatura con una dimensión movilizadora y plebiscitaria que recordaba los tiempos de Yrigoyen. Aunque retenía el énfasis del partido en cuanto a las libertades civiles y la democracia, la Coordinadora abogaba por la movilización masiva, trató de desafiar al peronismo en los sindicatos y en las comunidades de clase obrera y enfatizó que la democracia no constituía un fin en sí, sino más bien un prerrequisito de la justicia social. La Coordinadora fomentó los esfuerzos de promover a Alfonsín como el líder plebiscitario de "un tercer movimiento histórico" que sucedería a aquellos liderados por Yrigoyen y Perón. Mientras aún era candidato y durante el primer año de su mandato, Alfonsín se refería repetidamente a este tema en sus discursos. El aspecto plebiscitario del liderazgo de Alfonsín se acentuó en 1984 cuando los líderes de la UCR suspendieron una cláusula en la constitución del partido que impedía que funcionarios electos ocuparan cargos en el partido (permitiendo así que Alfonsín siguiera como jefe del partido mientras ocupaba el cargo de Presidente de la Argentina) y nuevamente antes de la promulgación del plan económico de 1985 cuando tecnócratas extrapartidarios reemplazaron a antiguos partidarios fieles y leales en el Ministerio de Economía<sup>75</sup>. Sin embargo, el movimentismo de Alfonsín difería de aquel de Perón o Yrigoyen. Mientras que los últimos habían enfatizado la soberanía popular a expensas de un gobierno limitado, Alfonsín mantuvo un balance entre estos dos aspectos de la democracia. Este balance, junto con "el ambiente de los tiempos" (los abusos más notorios de la dictadura de 1976-1983 se habían perpetrado en los áreas de libertades individuales y derechos humanos), alejaron al movimentismo de Alfonsín de los aspectos más nocivos del fenómeno. Los primeros años de la presidencia de Alfonsín evidenciaron matices de plebiscitismo, pero

no tuvieron ninguna vocación hegemónica ni una visión ecléctica de los caminos aptos para alcanzar el poder.

En contraste con el radicalismo, que adquirió algunas características de movimentismo bajo Alfonsín, el peronismo reaccionó frente a la derrota electoral de 1983 deshaciéndose de varios elementos movimentistas (muchos de los cuales recuperó cuando Carlos Menem ganó la elección presidencial preliminar en 1988). El movimentismo permaneció fuerte durante la campaña electoral de 1983 que aún presentaba al PJ como el instrumento electoral del movimiento, que los sindicalistas de Lorenzo Miguel habían colocado bajo su custodia hasta que surgiera el nuevo líder plebiscitario. Cuando Alfonsín derrotó a Luder en la elección presidencial de 1983, el prestigio de Miguel cayó estrepitosamente y, ya que aún no había surgido el nuevo líder plebiscitario, se abrió el espacio para la institucionalización del PJ. Para fines de 1984, muchos líderes peronistas demandaban cambios, los que incluían la renuncia de Miguel a la vicepresidencia del partido, una competencia más abierta para las candidaturas y cargos de liderazgo partidarios y la reorganización del PJ para aumentar su autonomía frente a los sindicatos y, a la larga, disminuir su grado de dependencia en un líder plebiscitario. Miguel y sus aliados contraatacaron, defendiendo el estilo político autoritario del PJ, la tradición de negociaciones entre bambalinas y la configuración como un movimiento. Los que exigían cambios se llegaron a denominar el ala renovadora; los que privilegiaban el statu quo se llegaron a denominar el ala ortodoxa. Dicha división se consolidó en las elecciones legislativas de 1985 cuando las dos alas presentaron su propia lista de candidatos a diputado en la provincia de Buenos Aires. La UCR ganó a nivel nacional, pero en la contienda implícita intraperonista el ala renovadora obtuvo más votos que el ala ortodoxa.

El ala renovadora incluyó a políticos urbanos e intelectuales, notables de las provincias con sus seguidores clientelistas y el "Grupo de 25". Líderes de sindicatos más pequeños que habían organizado huelgas generales a fines de los años setenta y comienzos de los ochenta. El ala ortodoxa incluyó a las "62 Organizaciones" de Lorenzo Miguel, sus propios notables de las provincias y jefes políticos de los suburbios de clase obrera de Buenos Aires. Salvo por la veneración de Perón los sectores renovadores y ortodoxas tenían poco en común. Durante el gobierno de Alfonsín, la mayoría de los peronistas renovadores apoyaban, y los peronistas más ortodoxos se oponían, al enjuiciamiento de líderes militares acusados de violaciones a los derechos humanos, la legalización del divorcio, la oposición a la ayuda de los Estados Unidos para los Contras en Nicaragua y la convocación de una moratoria para el pago de la deuda externa<sup>76</sup>. Además, el Grupo de 25 vinculado al ala renovadora asumió una postura más combativa frente al gobierno de Alfonsín que las 62 Organizaciones vinculadas al ala ortodoxa. Un aspecto interesante de la situación es que tanto el "25" como las "62" —incluso Miguel y sus aliados quienes privilegiaban explícitamente la configuración del peronismo como un movimiento— estaban luchando por un espacio dentro del PJ, lo que implica que ambos percibían el partido como un vehículo importante para la expresión de intereses, o al menos para la influencia política. Si, como declara Selznick, institucionalizar es "infundir de valor más allá de los requisitos técnicos de la tarea inmediata", entonces el PJ se estaba institucionalizando durante el gobierno de Alfonsín. El peronismo se estaba convirtiendo más en un partido y menos en un movimiento.

El ala ortodoxa del peronismo nunca se recuperó de la derrota electoral de 1983, pero retuvo el control sobre la maquinaria formal del partido hasta 1987 cuando el ala renovadora tomó el control bajo Antonio Cafiero, el recientemente elegido gobernador de Buenos Aires. Sin embargo, cuando Cafiero estaba asumiendo la presidencia del PJ y el cargo de gobernador de Buenos Aires (escalón tradicional para ser designado candidato presidencial), el peronismo fue sacudido por el surgimiento de una nueva figura política: Carlos Menem. El gobernador carismático de La Rioja declaró públicamente que planeaba disputar la designación del candidato presidencial peronista que estaba programada para realizarse mediante una elección preliminar directa en julio de 1988 (la primera vez que se había usado este método para designar al candidato peronista). Aunque originalmente Menem perteneció al ala renovadora,

cuando llegó la hora de las elecciones preliminares se vinculó principalmente con una nueva facción de líderes sindicales peronistas denominada el "Grupo de 15" y, en forma más ambigua, con el ala ortodoxa del partido. Su popularidad personal, el apoyo de los sindicatos grandes y poderosos del "15" y la incapacidad de Cafiero de diferenciar sus políticas de las de Alfonsín, permitieron que Menem se convirtiera en el candidato presidencial del peronismo para las elecciones de mayo de 1989, las que ganó por un margen de 47 a 37 puntos porcentuales sobre Angeloz, el candidato radical.

Después que Menem asumió el cargo en julio de 1989, la antigua tendencia hacia la institucionalización del PJ se revirtió. La marginalización del PJ se hizo evidente en las designaciones ministeriales de Menem: predominaron personajes peronistas de menor envergadura ligados a él personalmente y tecnócratas comprometidos con la liberalización de la economía. Pasando por alto al PJ, Menem designó a Alvaro y María Julia Alsogaray, los líderes de la UCeDé, y Octavio Frigerio, tecnócrata del MID, a cargos extraministeriales claves. Cuando Menem finalmente se reunió con el Consejo Nacional del PJ, los líderes del partido anunciaron que se habían enterado de las designaciones de Menem mediante la prensa<sup>77</sup>. La actividad del PJ a nivel local decayó, y sólo un puñado de diputados peronistas (el "Grupo de 8", que luego fueron expulsados del movimiento) se pusieron de pie para criticar las políticas económicas de Menem o sus indultos a líderes militares condenados por violaciones a los derechos humanos. En agosto de 1990 se produjo un paso simbólico en dirección opuesta a la institucionalización del partido cuando Antonio Cafiero renunció como presidente del PJ y abrió el camino para que Menem se hiciera cargo y neutralizara el aparato partidario. Como señaló un periodista, la ocupación por Menem de la presidencia del PJ significaba que ahora "tendría que buscar el balance entre su convicción de que la estructura partidaria es virtualmente insignificante y su intención de controlar todo lo que se mueve en el campo político"<sup>78</sup>.

Menem resolvió el dilema haciendo que su hermano, el senador de La Rioja Eduardo Menem, fuera designado primer vicepresidente del partido. Luego hizo uso de una licencia para que Eduardo Menem pudiera asumir el peso diario del manejo del partido. Sin embargo, Carlos Menem retuvo el control del recurso principal de influencia política del partido: cuando llegase la hora de las elecciones, los candidatos del PJ seguirían siendo seleccionados, como lo dijo un líder del partido, "por el dedo grande, fuerte, maravilloso y pesado de nuestro conductor"<sup>79</sup>. Como dijo el Vicepresidente Eduardo Duhalde cuando Cafiero estaba contemplando su renuncia: "a nadie le interesa quién es el presidente del partido" porque "el conductor del movimiento es Menem"<sup>80</sup>.

Ya transcurrido bastante tiempo de la presidencia de Menem, el plebiscitismo sigue dominando la organización partidaria. En 1991, el PJ nombró a Palito Ortega, cantante, y Carlos Reutemann, corredor de autos, como candidatos a gobernador en Tucumán y Santa Fe respectivamente. Ningún lazo los unía con el PJ pero lazos personales unían a ambos con Menem (ambos ganaron). Similarmente, en las elecciones senatoriales de junio de 1992 en la Capital Federal, Menem impuso a Avelino Porto como el candidato peronista, en contra de los deseos de la rama local del PJ (Porto perdió)<sup>81</sup>. El eclipse del PJ durante la primera mitad de la presidencia de Menem marginó al sector del peronismo más interesado en la continuidad de la actividad electoral y legislativa.

Además de representar un resurgimiento del plebiscitismo, la primera mitad de la presidencia de Menem también mostró, aunque en forma atenuada, los aspectos más preocupantes del movimentismo: la vocación hegemónica y el enfoque de "todo vale" para alcanzar el poder. A pesar de la declaración de Menem en junio de 1992 que "un presidente no puede ser un mandatario omnipotente y con tentaciones hegemónicas, ni con delirios unitarios, ni con aislamientos del resto de la sociedad política"<sup>82</sup>, no hizo nada para disuadir a su hermano de encabezar una campaña para una reforma a la Constitución que permitiría su reelección inmediata (una idea que los colaboradores de Alfonsín también sacaron a luz a mediados de la década del ochenta). Explicó los indultos a los oficiales militares condenados

por violaciones a los derechos humanos como un paso hacia "la reconciliación nacional", y repetidamente utilizó decretos presidenciales para pasar por alto a la legislatura. Por ejemplo, en 1990 Menem utilizó decretos para restringir el derecho a huelga en los servicios públicos (a pesar de que la Constitución establece que no se pueden usar los decretos presidenciales para enmendar leyes existentes, como las que regulan las huelgas), para prohibir que aquellos afectados por privatizaciones demanden al Estado durante dos años (a pesar de que la Constitución dice que los ciudadanos pueden demandar al Estado) y para otorgar una amnistía a oficiales militares esperando ser juzgados por violaciones a los derechos humanos (a pesar de que la Constitución establece que sólo el Congreso puede otorgar amnistías antes del juicio penal). Esta andanada de decretos fue presagiada por un día tumultuoso en el Congreso en abril de 1990, cuando los peronistas usaron la intimidación física y una votación oral relámpago para obtener la aprobación legislativa de un aumento en el número de jueces de la Corte Suprema de cinco a nueve<sup>83</sup>. Aunque Menem parece estar comprometido con la contienda electoral y con reconocer la legitimidad de la competencia permanente del radicalismo para alcanzar el poder, muchos aspectos del movimentismo han invadido su presidencia.

### VÍNCULOS PARTIDO-CLASE EN LA DÉCADA DEL OCHENTA

Entre el golpe de 1976 y las elecciones de 1989 la estructura socioeconómica de la Argentina cambió drásticamente. En cuanto a los principales sectores económicos, el capital financiero incrementó enormemente, la suerte de la industria cayó a plomo y la agroindustria de exportación de cereales comenzó a superar en forma decisiva a los intereses tradicionales de la ganadería. A medida que el capital se consolidaba y se hacía más móvil, las diferencias entre estos sectores comenzaron a desdibujarse. La cantidad de trabajadores empleados en las grandes usinas del área metropolitana de Buenos Aires disminuyó precipitosamente y un incremento repentino en el tamaño del sector no estructurado urbano proporcionó por primera vez en la Argentina una reserva grande de obra de mano. Emigración, proletarización y desempleo infligieron sus pérdidas a los pequeños empresarios, empleados de oficina y profesionales, aunque en general los argentinos de la clase media con ahorros en moneda extranjera pudieron mantener su estilo de vida, pero no su optimismo.

La transformación de la estructura socioeconómica modificó los intereses y características de las principales clases sociales, pero la relación entre las clases y los partidos políticos básicamente no cambió. Tal como se mencionó anteriormente, muchas clases sociales argentinas han evitado usar a los partidos como vehículos para la representación de sus intereses. Normalmente han usado las máximas organizaciones sectoriales —la SRA para los ganaderos, la Unión Industrial Argentina (UIA) para los grandes industrialistas y la CGT para los obreros— para presionar o negociar con el poder ejecutivo. El uso de organizaciones sectoriales para presiones y negociaciones políticas no es ni una característica exclusiva de la Argentina ni tampoco se opone a la consolidación democrática. Es la absoluta escasez de alguna representación partidaria por parte de los actores clasistas la que reduce el número de personas influyentes con un interés conspicuo e inmediato en la sobrevivencia de la actividad electoral y legislativa y de esa manera le quita a la democracia un baluarte que en otras circunstancias podría disfrutar. Lo que importa para la estabilidad democrática no es el equilibrio entre grupo de interés y actividad partidaria, sino el grado al cual los formadores de opinión de las clases sociales más poderosas y politizadas están comprometidos con un mínimo absoluto de actividad partidaria.

Después que los peronistas perdieron las elecciones de 1983, el sector renovador vinculado al "25" comenzó una campaña diseñada para arrebatar el PJ de manos de Lorenzo Miguel y sus 62 Organizaciones. El esfuerzo demostró que facciones importantes del liderazgo sindical peronista habían empezado a tomar el partido más en serio como un vehículo para la representación de sus intereses. Sin embargo, a fines de 1985 la lucha por el PJ tomó el segundo plano detrás de Saúl Ubaldini, jefe de la nominalmente independiente

CGT. En vez de competir por el PJ, Ubaldini, un personaje carismático que había pertenecido al "25", optó por convertir a la CGT en el polo principal de oposición política. Con ese propósito montó una campaña de huelgas generales, manifestaciones callejeras y acusaciones atronadoras contra el gobierno en los medios de comunicación. La triple polarización de renovadores, ortodoxas y sindicalistas proUbaldini plantea un tema que tiene mucho que ver con la consolidación democrática. A pesar de sus diferencias, el "25" y los "62" se interesaban en la sobrevivencia del PJ y, por consiguiente, en la sobrevivencia de las elecciones y la actividad legislativa. En contraste, aunque no se dudaba del compromiso de Ubaldini con la democracia, las tácticas que usó tendieron a marginar a los partidos, las elecciones y el poder legislativo como campos de contienda política.

Para fines de 1986 líderes sindicales de cada una de las tres facciones principales se volvían cada vez más escépticos con respecto a la postura combativa de Ubaldini, y a comienzos de 1987 algunos se juntaron para formar una cuarta facción, el Grupo de 15, a quienes Alfonsín dio el control del Ministerio de Trabajo a cambio de un acuerdo para hacer desistir las huelgas y las demandas salariales intransigentes. Es interesante notar que el "15" y los sindicalistas proUbaldini, que no gozaban de una relación muy amistosa, compartían la misma tendencia de rechazar al PJ como un vehículo importante para la expresión de sus intereses. En cambio, ambos buscaron la forma de influir directamente en el poder ejecutivo nacional, sin la mediación de instituciones legislativas o partidarias. La facción de Ubaldini trabajó desde afuera, movilizandó huelgas y manifestaciones; el "15" trabajó desde adentro, tomando el control del Ministerio de Trabajo y negociando entre bambalinas con funcionarios del gobierno. Después de las elecciones de 1987, Alfonsín reemplazó al "15" por un equipo de la UCR. Habiendo perdido el control de medios gubernamentales importantes para influenciar en la formulación de políticas, el "15" se convirtió en la base orgánica principal para la postura de Menem como candidato a la presidencia. Después de ser elegido, Menem marginó al PJ como una organización importante y, por ende, como un interlocutor formal entre los sindicatos y el Estado.

Los vínculos entre los partidos y los hacendados, industrialistas y financistas —cada vez más consolidados desde mediados de la década del 70— también fueron débiles durante la presidencia de Alfonsín. La UCeDé hablaba francamente en defensa de los intereses comerciales, pero nunca estableció vínculos estrechos con la SRA o la UIA. Por otra parte, aunque muchos empresarios grandes y gerentes de alto nivel sin duda votaron por los candidatos de la UCeDé, otros no se sentían cómodos con los ideólogos de libre mercado que lideraban el partido. Edward Gibson cita dos razones por la debilidad de los vínculos entre el empresariado y la UCeDé. En primer lugar, muchos sectores de la actividad comercial argentina dependen fuertemente de subsidios estatales (los que, según una apreciación, en 1987 totalizaron el 12% del PIB), y los representantes de estos sectores no se entusiasmaron con las propuestas de la UCeDé de cortar los gastos públicos y reducir el papel del Estado en la economía. En segundo lugar, muchos líderes del empresariado creían que la UCeDé nunca llegaría a ganar la presidencia; como señala Gibson: "Obviamente no es un buen negocio afiliarse íntimamente con un partido político para el cual no se prevé ningún acceso previsible al poder del Estado"<sup>84</sup>.

Durante la década del ochenta, los radicales siguieron atrayendo apoyo desde sectores heterogéneos de la sociedad, pero como de costumbre apelaban a las personas como ciudadanos individuales más que como miembros de grupos laborales. A principios de la década del ochenta, la Coordinadora incursionó en los sindicatos en forma tentativa, pero dichas tentativas terminaron cuando el Senado derrotó el proyecto de ley que reformaba a los sindicatos. Entretanto, los vínculos de la UCR con las grandes empresas siguieron débiles. Salvo bajo Frondizi, cuyo plan de estabilización económica incluyó salarios máximos e incentivos para las inversiones extranjeras, entre mediados de la década del cuarenta y fines de la del ochenta los radicales apoyaban un modelo económico estatista, nacionalista y de redistribución. Este modelo era apoyado por empresas más pequeñas que dependían de las

ventas nacionales, pero ofrecía poco a las empresas más poderosas. La campaña presidencial de Angeloz en 1989 rompió con esta tradición abogando por un cambio hacia políticas de libre mercado, y recibió el apoyo de algunos sectores del empresariado. Sin embargo, otros sectores reconocían que debido a la grave crisis económica los radicales tenían pocas posibilidades de ganar y apoyaron a Menem.

El desarrollo más interesante en las relaciones empresariado-partido durante los últimos años de la década del ochenta fue el acercamiento entre la gran empresa y el peronismo. Dicha convergencia comenzó a principios de 1989 cuando los sindicalistas del "15", quienes gravitaban sin problemas en círculos empresariales (Jorge Triaca y Armando Cavalieri eran dueños de empresas), persuadieron a los máximos industrialistas de la nación que ayudaran a financiar la campaña de Menem<sup>85</sup>. También le proporcionaron sus conocimientos expertos; Menem adquirió sus dos primeros ministros de economía del conglomerado gigante de cereales Bunge y Born. La alianza perduró hasta mediados del 1992. Si sigue dependerá del rendimiento de la economía, el ambiente ideológico y político internacional y la capacidad de los marginados por la alianza de desarrollar una alternativa.

Por consiguiente, a comienzos de la década del noventa la UCeDé, la UCR y el PJ competían para ser identificados con el modelo económico neoliberal que recién se había puesto de moda y que presentaba la única alternativa a las antiguas políticas nacionalistas, estatistas y de redistribución que, según todos, eran anacrónicas. Así cada uno de los partidos intentaba representar los intereses de una elite económica transnacional que consistía en intereses financieros y comerciales, granjeros exportadores y gerentes de industrias y servicios cuyas utilidades no dependían de la venta de productos a argentinos comunes y corrientes. Bajo esta configuración no había ningún partido principal que representara a la gente de clase media-baja, los jubilados, la agricultura e industria nacional, los trabajadores industriales del sector privado ni tampoco a los empleados públicos municipales, provinciales o nacionales. Muchos de estos grupos se encontraban más débiles que en el pasado, pero algunos, especialmente los sindicatos, aún retenían sus recursos de poder. En suma, a comienzos de la década del noventa los partidos políticos argentinos aún se caracterizaban por la debilidad de representación que en el pasado había contribuido al colapso de la democracia.

## **PARTIDOS POLÍTICOS Y ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA: LA ARGENTINA EN LA DÉCADA DEL NOVENTA**

En su esencia la democracia es un concepto discutible, una idea intrínsecamente debatible<sup>86</sup>. Llegar a un acuerdo universal sobre lo que significa la democracia no es posible ni tampoco deseable porque la Constitución política se puede mejorar comparándola con una variedad de estándares. Sin embargo, la comunicación expresiva y la investigación empírica exigen una definición funcional. Las definiciones usadas en estudios recientes normalmente abarcan dos categorías. Se percibe la democracia ya sea desde una perspectiva continua, como un ideal abstracto al cual las disposiciones políticas reales se aproximan de una forma más o menos exacta, o desde una perspectiva discontinua, como un conjunto de disposiciones políticas específicas que pueden o no estar presentes. La perspectiva discontinua de la democracia normalmente se formula en términos minimalistas o de umbral y permite representar las disposiciones políticas reales, con la inevitable reserva y ambigüedad, como democráticas o no democráticas.

Los análisis que emplean los conceptos de estabilidad democrática y colapso democrático invariablemente se basan en la perspectiva discontinua de la democracia. La razón es que dichos conceptos presuponen lógicamente la perspectiva discontinua (desde la perspectiva continua, el colapso democrático se denominaría más bien una baja precipitosa en la calidad de la democracia). En este estudio nos interesa evaluar si en la década del noventa el movimentismo y los débiles vínculos entre los partidos y los actores clasistas podrían producir un colapso de la democracia. Por consiguiente, lo más apropiado es una definición discontinua de la democracia. Por ende, se define la democracia como un conjunto de

disposiciones políticas donde (1) se eligen a los líderes mediante elecciones libres y leales en las que casi todos los ciudadanos adultos tienen derecho a voto y a postular como candidatos, (2) los líderes elegidos de esta manera toman casi todas las decisiones básicas de política del Estado y (3) a los ciudadanos se les otorgan en principio, y no se les niega sistemáticamente en la práctica, derechos civiles básicos como el derecho a no sufrir abuso físico de parte de agentes del Estado, la libertad de expresión y de prensa, el derecho de asociación y reunión y el derecho de presentar peticiones al gobierno<sup>87</sup>.

El colapso democrático se puede producir de varias formas, incluyendo la insurrección armada desde adentro del país o la intervención extranjera desde afuera del país. Es poco probable que en la década del noventa la Argentina experimente cualquiera de estas dos formas de colapso democrático. Otra forma en que se puede producir el colapso democrático es que la democracia sea erosionada desde adentro por el presidente que ocupa el cargo. Se podría argumentar que esto fue lo que sucedió cuando Yrigoyen usó en forma excesiva el derecho de intervención presidencial para controlar a los gobiernos provinciales reacios, o cuando en las elecciones de 1951 Perón arregló las circunstancias para que fueran desfavorables para la oposición. La discusión se concentraría en si debido a estos abusos de la autoridad presidencial el sistema político descendió por debajo del umbral requerido para cumplir con los criterios minimalistas de una democracia. La erosión desde adentro es un peligro implícito de la vocación hegemónica del movimentismo y constituyó la justificación implícita de la proscripción de los radicales yrigoyenistas en 1932 y del peronismo entre 1955 y 1972. En ambos casos, el remedio desde un punto de vista de la democracia fue peor que la enfermedad.

El resurgimiento del movimentismo bajo Alfonsín comprendió una fuerte dosis de plebiscitismo, pero no revivió la vocación hegemónica ni el enfoque de "todo vale" para alcanzar el poder que caracterizaron el radicalismo de Yrigoyen. En contraste, el resurgimiento del movimentismo bajo Menem comprende los tres elementos, aunque la vocación hegemónica y la visión ecléctica de los caminos aptos para alcanzar el poder son mucho más débiles que bajo Perón. Es dudoso, sin embargo, que en los años noventa el peronismo busque eliminar a la oposición política o retener el poder usando medios extraconstitucionales. La mayoría de los elementos subculturales han desaparecido y la reestructuración económica iniciada durante la presidencia de Menem implica costos sociales que crearán dificultades para que el presidente mantenga suficiente apoyo popular como para intentar un proyecto hegemónico. La eliminación de la oposición y la retención del poder usando medios extraconstitucionales también irían en contra de la sensibilidad pública de la Argentina, los países vecinos de América Latina, Norteamérica y Europa.

La posibilidad de un golpe militar es la amenaza más grave que enfrenta la estabilidad democrática de la Argentina en la década del noventa. Al menos un aspecto del movimentismo, la visión ecléctica de los caminos aptos para alcanzar el poder, encaja de forma preocupante con esta posibilidad. Un partido se encuentra limitado a la competencia electoral, pero un movimiento puede aceptar y explorar muchos caminos para alcanzar el poder, uno de los cuales es un golpe gestionado por oficiales militares solidarios. Sin embargo, luego de las experiencias de los años setenta es poco probable que el peronismo o el radicalismo apuesten a un golpe militar. Ambos partidos principales reaccionaron frente a las cuatro insurrecciones militares entre 1987 y 1990 condenando la intervención militar y subrayando su apoyo al régimen democrático.

La carencia de representación de actores clasistas en los partidos constituye una amenaza más grave para la estabilidad democrática que el movimentismo. Como se ha señalado anteriormente, la presencia de vínculos débiles entre los partidos y los actores clasistas constituye una amenaza para la estabilidad democrática porque, frente a la ausencia de un interés real en la sobrevivencia de los partidos (y por ende en las instituciones electorales y legislativas que requieren los partidos para operar eficazmente), los actores clasistas, al sentir que no se están tomando en cuenta sus intereses, pueden llegar a presionar a

las Fuerzas Armadas para que derriben a un gobierno que no sea de su agrado. Si no, pueden tomar acciones que saben que crearán un ambiente de inestabilidad propicio para un golpe, o comportarse de una manera que obligará a oficiales militares ya dispuestos a efectuar un golpe a invitarlos a formar parte de una futura coalición gobernante (la campaña de tomas de fábricas por los sindicatos peronistas es un buen ejemplo de este último escenario). Además, las Fuerzas Armadas nunca intervienen sin antes sondear la opinión de los civiles acerca de un posible golpe. Quizás la manera más significativa en que dichos actores influyen en las acciones militares es no oponerse a un golpe cuando dicha oposición podría prevenirlo, lo que se hace mucho más propenso cuando los formadores de opinión de las clases sociales poderosas carecen de un interés real en la sobrevivencia de los partidos políticos (y por ende de las elecciones y la legislatura).

Una comparación de la Argentina, donde la estabilidad democrática ha sido elusiva, con Chile y Venezuela, donde la democracia ha sobrevivido por periodos más largos, ilustra cuán crucial es para la estabilidad democrática la representación de los actores clasistas en los partidos, y las condiciones en que se produce. Tanto en Chile como en Venezuela actores clasistas poderosos y politizados han expresado sus principales demandas políticas a través de organizaciones partidarias, así como también a través de la presión de grupos de interés y de las negociaciones. Después de 1958 en Venezuela, la Acción Democrática representó eficazmente en los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno a una clase obrera poderosa y politizada, y así proporcionó a los obreros y a los sindicatos un interés más real en la sobrevivencia del régimen democrático. Después de 1931 en Chile, los liberales y los conservadores dieron a los hacendados suficiente representación en el legislativo para que evidenciaran un considerable interés en la sobrevivencia del sistema. Cuando a fines de la década del cincuenta las reformas electorales aflojaron el control de los hacendados sobre la votación rural, la derecha comenzó definitivamente a aproximarse a la política antipartidaria y así derribó un baluarte de la democracia chilena<sup>88</sup>. Las reformas electorales chilenas de fines de la década del cincuenta se comparan, en su impacto sobre la elite conservadora rural, con las reformas argentinas de 1912.

En algunos países, la falta de representación de actores clasistas en los partidos no influye mucho en la estabilidad democrática. Los Estados Unidos, donde los sectores laborales, agrícolas e industriales tienen vínculos estrechos con legisladores individuales pero muy débiles con las organizaciones partidarias o grupos legislativos, constituye un ejemplo de lo anterior. Sin embargo, la debilidad de dichos vínculos no influye mucho en la estabilidad democrática porque son pocos los ciudadanos que dudan del sistema y porque las Fuerzas Armadas, un agente potencial clave en el colapso democrático, no tienen ninguna tradición de intervención política. Otro ejemplo es Colombia, donde algunos ciudadanos sí dudan del sistema y donde en un pasado no muy lejano un personaje militar sí gobernó. Pero tal como sucede en los Estados Unidos, en Colombia la debilidad de los vínculos sindicato-partido no influye mucho en la estabilidad democrática porque, en el caso de Colombia, la clase obrera es demasiado débil para convertirse en un agente de huelgas y manifestaciones, un miembro clave de una coalición golpista o, frente a la posibilidad de un golpe, un defensor decidido de las instituciones democráticas<sup>89</sup>.

La representación de actores clasistas en los partidos es crucial para la estabilidad democrática en países como la Argentina donde las instituciones partidarias, legislativas y electorales no gozan de una legitimidad duradera, donde las Fuerzas Armadas a menudo han derribado a los gobiernos civiles y donde los actores clasistas claves gozan de un poder inusitado. Ya se ha probado que la Argentina cumple con los primeros dos criterios. Se puede demostrar prontamente que cumple también con el tercero. Además de controlar los recursos alimenticios y de divisas más importantes de la Argentina, los productores de cereales y ganado se encuentran más concentrados geográficamente y más culturalmente cohesionados que las elites agrícolas exportadoras de la mayoría de los otros países latinoamericanos<sup>90</sup>. El movimiento obrero argentino también es poderoso desde una perspectiva de concentración

nacional. La densidad sindical (en 1986 el 56% de los asalariados argentinos pertenecía a un sindicato), la centralización orgánica (existe sólo una confederación de sindicatos, la CGT), la unidad política (ningún sindicalista de envergadura dice ser otra cosa que no sea peronista) y la concentración geográfica (la mayoría de las industrias se encuentran ubicadas dentro de ciento setenta kilómetros de la ciudad de Buenos Aires) hacen que el movimiento sindical argentino sea uno de los más poderosos del mundo<sup>91</sup>.

La diferencia más grande entre la década del noventa y las eras anteriores no es que se hayan fortalecido los vínculos entre los actores clasistas y los partidos políticos (eso no ha sucedido), sino que es menos probable que las Fuerzas Armadas se apoderen del gobierno. Existen varias razones que hacen poco probable que se produzca un golpe militar en los años noventa. La memoria del último gobierno militar —un período de gruesas violaciones a los derechos humanos, desastre económico y derrota militar en el Atlántico Sur— aún no se ha reivindicado y además los fracasos acumulados de sesenta años de periódicos gobiernos militares han debilitado la voluntad gubernamental de las Fuerzas Armadas. El desafío de la reestructuración económica y la ausencia de gran violencia política también contribuyen a que la idea de apoderarse del gobierno sea menos atractiva y menos urgente que en el pasado. Otro factor que influye en contra de la posibilidad de un golpe es el colapso del comunismo en la antigua Unión Soviética y sus países satélites, lo que hace que la “amenaza de subversión comunista” sea menos creíble como justificación de un golpe militar. Por último, ha acrecentado en América Latina el nivel de la pérdida de prestigio, comercio e inversiones internacionales que probablemente se produciría como resultado de un golpe. Los vínculos débiles entre los partidos y las clases sociales aún constituyen un impedimento estructural para la estabilidad democrática, pero por ahora es poco probable que el agente histórico del colapso democrático actúe.

Apéndice: Cuadros

Los cuadros sinópticos sobre la Argentina se presentan a continuación:

Cuadro N° 7.1 Participación en las elecciones presidenciales, Argentina, 1912-1989  
(porcentaje)

<i>Año</i>	<i>Universo inscrito</i>	<i>Votantes inscritos</i>	<i>Universo votante</i>
1912	13	69	9
1916	15	56	9
1922	17	55	10
1928	17	81	18
1931	17	73	13
1937	18	76	14
1946	22	85	19
1951	51	87	45
1958	52	90	47
1963	55	86	46
1973	56	89	49
1983	62	84	51
1989	63	84	56

FUENTES: Ronald H. McDonald y J. Mark Ruhl, *Party Politics and Elections in Latin America* (Boulder, Colorado: Westview Press, 1989), pág. 160. Los datos para 1989 se calcularon basados en Rosendo Fraga, *Argentina en las urnas 1916-1989* (Buenos Aires: Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, 1989), pág. 17.

Cuadro N° 7.2 Resultados de las elecciones presidenciales por partido o categoría de partidos, Argentina, 1946-1989  
(porcentaje de votos)

	1946	1951	1958	1963	Marzo 1973	Sept. 1973	1983	1989
Peronismo	52	62	—	—	50 <sup>a</sup>	62 <sup>a</sup>	39	47 <sup>b</sup>
Neoperonismo	—	—	1	3	—	—	—	—
UCR	43 <sup>c</sup>	32	—	—	21	24	50	37 <sup>d</sup>
UCRP	—	—	29	26	—	—	—	—
UCRI	—	—	45 <sup>e</sup>	17	—	—	—	—
Izquierda	—	—	3	3	8	2	3	4
Centro	—	—	4	11	—	—	1	—
Derecha	—	2	5	16	21	12	1	8
Provincial, otros	3	2	5	5	—	—	3	3
En blanco	3	2	9	19	—	—	3	1

FUENTES: Para 1946, 1951: Darío Cantón, *Elecciones y partidos políticos en la Argentina* (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Argentina, 1973), págs. 272-73; para 1958, septiembre de 1973: Fraga, *Argentina en las urnas 1916-1989*, págs. 12-14; para 1963: Peter G. Snow, "Parties and Politics in Argentina: The Elections of 1962 and 1963", *Midwest Journal of Political Science* 9 (febrero de 1965), pág. 25; para marzo de 1973, 1983, 1989: Liliana de Riz y Catalina Smulovitz, "Instituciones y dinámica política: El presidencialismo argentino". Documento CEDES 37, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires (1990), págs. 54, 55, 59.

NOTAS: Los partidos representados por las categorías *izquierda*, *centro* y *derecha* varían de la siguiente manera. Elección de 1951: *derecha*, Partido Demócrata. Elección de 1958: *izquierda*, Socialista; *centro* Demócrata Cristiano, Demócrata Progresista; *derecha*, Demócrata, Demócrata Conservador Popular, Liberal, Conservador Popular, Cívico Independiente. Elección de 1963: *izquierda*, Socialista Argentino; *centro*, Demócrata Cristiano, Demócrata Progresista; *derecha*, Unión del Pueblo Argentino, Socialista Democrático, Federación Nacional del Partido del Centro. Elección de marzo de 1973: *izquierda*, Alianza Popular Revolucionario, Socialista de los Trabajadores, Frente de Izquierda Popular; *derecha*, Alianza Popular Federalista, Alianza Republicana Federal, Nueva Fuerza, Socialista Democrático. Elección de septiembre de 1973: *izquierda*, Socialista de los Trabajadores; *derecha*, Alianza Popular Federalista. Elección de 1983: *izquierda*, Partido Intransigente, Movimiento al Socialismo, Partido Socialista Popular, Frente de Izquierda Popular, Partido Obrero, Movimiento Línea Popular; *centro*, Demócrata Cristiano, Demócrata Progresista, Movimiento de Integración y Desarrollo; *derecha*, Alianza Federal, Alianza Democrática Socialista, Partido Federal, Confederación Nacional del Centro. Elección de 1989: *izquierda*, Alianza Izquierda Unida, Alianza Unidad Socialista, Partido Obrero, Frente Humanista-Verde, Socialista Popular; *derecha*, Alianza del Centro, Blanco de los Jubilados, Unión del Centro Democrático, Partido Federal.

a Representa el voto por la coalición FREJULI, que incluye el PJ, el MID y otros partidos pequeños y facciones partidarias.

b Representa el voto por la coalición FREJUPO, que incluye el PI, Demócrata Cristiano y Conservador Popular.

c Representa el voto por la coalición Unión Democrática, que incluye la UCR, UCR-Antipersonalista, Demócrata Nacional, Demócrata Progresista, Socialista y Comunista.

d Incluye 5% para la Confederación Federalista Independiente, una coalición de partidos provinciales que comprometió sus votos presidenciales de antemano al candidato de la UCR, Angeloz.

e Incluye los votos de los peronistas, quienes fueron instruidos por Perón a votar por el candidato de la UCRI.

Cuadro N° 7.3 Resultados de las elecciones presidenciales por partido, Argentina, 1973-1989

Marzo de 1973 (porcentaje de votos válidos)		Septiembre de 1973 (porcentaje de votos válidos)	
FREJULI (coalición liderada por los peronistas)	49,5	FREJULI (alianza liderada por los peronistas)	61,9
Unión Cívica Radical	21,3	Unión Cívica Radical	24,4
Alianza Popular Federalista	14,9	Alianza Popular Federalista	12,2
Alianza Popular Revolucionario	7,4	P. Socialista de los Trabajadores	1,5
Alianza Republicana Federal	2,9	TOTAL	100,0
Nueva Fuerza	2,0		
P. Socialista Democrático	0,9		
P. Socialista de los Trabajadores	0,6		
Frente de Izquierda Popular	0,4		
TOTAL	99,9		

  

1983 (porcentaje del total de votos)		1989 (porcentaje del total de votos) <sup>a</sup>	
Unión Cívica Radical	50,3	Fr. Justicialista de Un. Popular	46,7
Partido Justicialista	9,0	Unión Cívica Radical	32,0
Partido Intransigente	2,3	Alianza del Centro	6,2
Mov. de Integración y Desarrollo	1,2	Conf. Federalista Independiente	4,5 <sup>b</sup>
Alianza Federal	0,4	Alianza Izquierda Unida	2,4
Alianza Demócrata Socialista	0,3	Partido Blanco de los Jubilados	1,9
Partido Demócrata Cristiano	0,3	Alianza Unidad Socialista	1,3
Movimiento al Socialismo	0,3	Unión del Centro Democrático	0,3 <sup>c</sup>
Partido Socialista Popular	0,1	Partido Obrero	0,3
Frente de Izquierda Popular	0,1	Frente Humanista-Verde	0,3
Partido Obrero	0,1	Partido Socialista Popular	0,1
Movimiento Línea Popular	0,1	Partido Federal	0,1
Partido Federal	0,1	Partidos provinciales	2,5
Confederación Nacional del Centro	0,1	En blanco y nulos	1,4
Partidos provinciales	2,7	TOTAL	100,0
En blanco y nulos	2,7		
TOTAL	100,1		

FUENTES: Para marzo de 1973, 1983, 1989: de Riz y Smulovitz, "Instituciones y dinámica política", págs. 54, 55, 59; para septiembre de 1973: Fraga, *Argentina en las urnas 1916-1989*, págs. 12-14.

a Acuerdo Popular, Partido del Trabajo y del Pueblo, MODEPA, Partido Socialista Democrático, Partido Demócrata Progresista, Movimiento de Integración y Desarrollo y MOPALI recibieron menos del 0,1% del total de votos cada uno.

b La Confederación Federalista Independiente apoyó la lista Angeloz-Guzmán (Unión Cívica Radical) para la presidencia y vicepresidencia.

c La Unión del Centro Democrático formó parte de la Alianza del Centro en todas las principales provincias y en la Capital Federal, pero postuló por su propia cuenta en algunas de las provincias más pequeñas.

Cuadro N° 7.4 Composición de la Cámara de Diputados por partido o categoría de partidos, Argentina, 1946-1991  
(número de escaños)

Año	Peronismo	Neoperonismo	UCR	UCRP	UCRI	Izquierda	Centro	Derecha	Provincial	Vacío	Total
1946	106	—	49	—	—	—	—	—	—	—	155
1948	109	—	45	—	—	2	—	—	—	2	158
1950	100	—	30	—	—	2	—	—	—	23	155
1952	135	—	14	—	—	—	—	—	—	—	149
1954	141	—	14	—	—	—	—	—	—	—	155
1958	—	—	—	52	130	—	—	—	2	3	187
1960	—	—	—	74	109	—	2	—	4	3	192
1963	—	16	—	71	20	6	38	20	18	3	192
1965	—	52	—	68	11	4	29	9	18	1	192
1973	123	3	51	—	—	13	22	26	5	—	243
1983	111	—	129	—	—	3	1	2	8	—	254
1985	101	—	129	—	—	6	4	3	11	—	254
1987	104 <sup>a</sup>	—	115 <sup>b</sup>	—	—	6	6	7	16	—	254
1989	120	—	90	—	—	6	7	12	18	—	254
1991	120	—	84	—	—	11	6	14	22	—	257
1993	126	—	85	—	—	7	3	12	23	—	256

FUENTES: Para 1946-65: Dario Cantón, *Materiales para el estudio de la sociología política* (Buenos Aires: Editorial del Instituto, 1968), 1:64-78; para 1973: Horacio Eichelbaum, *De nuevo el parlamento* (Buenos Aires: La Bastilla, 1974), págs. 120-31; para 1983-91: Liliana de Riz y Eduardo Feldman, *Guía del parlamento argentino: al 6/3/90* (Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert, 1990), págs. 65-68; Luigi Manzetti, *Institutions, Parties, and Distributional Coalitions in Argentine Politics* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, por publicarse), pág. 156; *Clarín* (edición internacional), diciembre 10-16 de 1991, pág. 5; Ernesto Cabrera, carta privada.

NOTAS: Los partidos de centro, derecha y provinciales todos se agrupan en el extremo derecho del espectro ideológico.

a Incluye a Domingo Cavallo, diputado extrapartidario quien fue elegido en la lista del PJ en el distrito de Córdoba, y un diputado del Partido Renovador de Buenos Aires, un protopartido aliado con el sector renovador del PJ.

b Incluye a dos diputados de Solidaridad para el Cambio, un protopartido aliado con la UCR.

Cuadro N° 7.5 Composición de la Cámara de Diputados por partido, Argentina, 1983-1991  
(número de escaños)

	1983	1985	1987	1989	1991	1993
<b>Partidos principales</b>						
Partido Justicialista	111	101	104 <sup>a</sup>	120	120	126
Unión Cívica Radical	129	129	115 <sup>b</sup>	90	84	85
<b>Partidos de izquierda</b>						
Grupo de los Ocho	—	—	—	—	5	2
Unidad Socialista	—	—	1	1	3	4
Partido Intransigente	3	6	5	2	2	1
Movimiento al Socialismo (MAS)	—	—	—	—	1	—
Alianza Izquierda Unida (MAS, PC, otros)	—	—	—	1	—	—
Partido Socialista Unificado	—	—	—	1	—	—
Humanismo y Liberación	—	—	—	1	—	—
<b>Partidos de centro</b>						
Partido Demócrata Progresista	—	1	2	3	3	2
Partido Demócrata Cristiano	1	2	3	3	1	—
Mov. de Integración y Desarrollo	—	1	1	1	1	1
Partido Federal	—	—	1	2	1	—
<b>Partidos de derecha</b>						
Unión del Centro Democrático	2	3	7	11	10	5
Movimiento de Dignidad e Independencia	—	—	—	—	3	—
Partido Blanco de los Jubilados	—	—	—	1	1	—
<b>Partidos provinciales<sup>c</sup></b>	8	11	15	17	19	23
<b>TOTAL</b>	254	254	254	254	257	256

FUENTES: De Riz y Feldman, *Guía del parlamento argentino al 6/3/90*, págs. 65-68; Manzetti, *Institutions, Parties, and Distributional Coalitions in Argentine Politics*, pág. 156; *Clarín* (edición internacional), Diciembre 10-16 de 1991, pág. 5; Ernesto Cabrera, carta privada.

NOTAS: Los partidos de centro, derecha y provinciales todos se agrupan en el extremo derecho del espectro ideológico. Cuando previo a las elecciones de 1991 Tierra del Fuego y las Islas del Atlántico Sur fue ascendida de un territorio a una provincia, se le asignó el mínimo de tres escaños en la Cámara Baja, elevando el total de 254 a 257.

a Incluye a Domingo Cavallo, diputado extrapartidario quien fue elegido en la lista del PJ en el distrito de Córdoba, y un diputado del Partido Renovador de Buenos Aires, un protopartido aliado con el sector renovador del PJ.

b Incluye a dos diputados de Solidaridad para el Cambio, un protopartido aliado con la UCR.

c En 1983 seis partidos provinciales ocupaban escaños, en 1985 ocho, en 1987 diez, en 1989 doce y en 1991 nueve; por ahora no hay datos disponibles para 1993.

*Cuadro N° 7.6* Diputados electos nacionales por partido, Argentina, 1983-1989  
(número de diputados electos)

	1983	1985	1987	1989	1991	1993
<b>Peronistas y radicales</b>						
Partido Justicialista	112	15	61	—	60	65
Frente Justicialista de Unidad Popular	—	—	—	67	—	—
Frente Justicialista de la Liberación	—	21	—	—	—	—
Frente Renovador	—	11	—	—	—	—
Frente Justicialista de Chubut	—	1	—	—	—	—
Unión Cívica Radical	128	63	52	41	42	41
<b>Partidos de izquierda</b>						
Unidad Socialista	—	—	1	—	3	2
Partido Intransigente	3	5	—	—	—	—
Alianza Izquierda Unida (MAS, PC, otros)	—	—	—	1	—	—
Frente Grande	—	—	—	—	—	3
<b>Partidos de centro</b>						
Partido Demócrata Progresista	—	1	1	—	1	1
Partido Demócrata Cristiano	1	—	—	—	—	—
<b>Partidos de derecha</b>						
Unión del Centro Democrático	2	—	5	—	4	1
Alianza del Centro (UCD y otros)	—	2	—	9	—	—
Partido Blanco de los Jubilados	—	—	—	1	—	—
MODIN	—	—	—	—	—	4
<b>Partidos provinciales</b>	8	8	7	8	15	9
<b>TOTAL</b>	254	127	127	127	125	126

**FUENTES:** Para 1983-1989: de Riz y Smulovitz, "Instituciones y dinámica política", págs. 56-60; para 1991: Ernesto Cabrera, "Multiparty Politics in Argentina?", sin publicar, pág. 30, tabla 7; para 1992: *Clarín*, octubre 5-11 de 1993, pág. 5.

**NOTAS:** Los partidos de centro, derecha y provinciales todos se agrupan en el extremo derecho del espectro ideológico. Las cifras no siempre concuerdan con las del Cuadro N° 7.5 porque los partidos establecen alianzas electorales y porque los diputados pueden cambiarse de un partido a otro o renunciar a su partido.

Cuadro N° 7.7 Composición del Senado por partido o categoría de partidos, Argentina, 1946-1989  
(número de escaños)

	1946	1951	1958	1963	1973	1983	1989
Peronismo	30 <sup>a</sup>	30	—	—	39	21	26
Neoperonismo	—	—	—	9	—	—	—
UCR	—	—	—	—	12	18	14
UCRP	—	—	—	25	—	—	—
UCRI	—	—	46	4	—	—	—
Otros	—	—	—	8	18	7 <sup>b</sup>	6 <sup>c</sup>
TOTAL	30	30 <sup>d</sup>	46	46	69 <sup>e</sup>	46	46

FUENTES: Para 1946-55: Eduardo A. Passalacqua, "Algunas reflexiones en torno al Senado y a una revitalización de su rol federativo" (MS. Buenos Aires, 1988), pág. 69; y conversación telefónica con Eduardo Passalacqua, Buenos Aires, 27 de julio de 1991; para 1958: Robert M. Potash, *The Army and Politics in Argentina, 1945-1962: Perón to Frondizi* (Stanford, California: Stanford University Press, 1980), pág. 270; y Cantón, *Materiales para el estudio de la sociología política*, 1:XVI-folio; para 1963: *Diario de sesiones de la Cámara de Senadores 1963*; para 1973: Eichelbaum, *De nuevo el parlamento*, págs. 119-23; para 1983-89: Peter Snow y Luigi Manzetti, "Political Forces in Argentina" (borrador de la tercera edición), pág. 143.

- a Corrientes eligió a 2 senadores no peronistas en 1946, pero sus credenciales nunca se aceptaron. Intervino Perón, se realizaron nuevas elecciones y se eligieron a 2 senadores peronistas. (Comunicación personal de parte de Eduardo A. Passalacqua).
- b 2 del Pacto Autonomista (Corrientes), 2 del antiguo Movimiento Popular Neuqueño neoperonista (Neuquén), 2 del Partido Bloquista (San Juan) y 1 del MID.
- c 2 del Pacto Autonomista (Corrientes), 2 del antiguo Movimiento Popular Neuqueño neoperonista (Neuquén), 2 del Partido Bloquista (San Juan).
- d En 1955 el número de senadores se incrementó a 36 cuando los territorios de Misiones, Chaco y Formosa se convirtieron en provincias.
- e En 1972 el gobierno militar enmendó unilateralmente la Constitución para requerir 3 senadores de cada provincia: 2 en representación del partido con la primera mayoría y 1 del partido con la segunda mayoría. En el Senado de 1973-76 4 de los "otros" miembros pertenecían a partidos que participaron en la coalición FREJULI y 1 representaba una organización peronista disidente de San Juan.